ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD:

El Consejo Nacional Electoral –CNE-, es un organismo autónomo e independiente, que promueve la sostenibilidad democrática, a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y control de la actividad electoral en Colombia y de la protección de los derechos de los actores electorales.

El artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009 establece que el Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa.

De igual forma, el artículo 40 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, incluyendo la posibilidad de elegir y ser elegido, tomar parte en mecanismos de participación democrática y constituir partidos y movimientos políticos.

En concordancia con lo anterior, el artículo 112 superior reconoce los derechos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, garantizando, entre otros, el acceso a medios de comunicación social del Estado o que hagan uso del espectro electromagnético, así como el derecho de réplica.

En este sentido, el Consejo Nacional Electoral, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pluralismo político, el derecho de participación y el acceso equitativo a los medios de comunicación por parte de las organizaciones políticas.

A su turno el Decreto No. 2085 de 2019 establece la estructura orgánica e interna del Consejo Nacional Electoral y desagrega las actividades que debe desarrollar éste para cumplir con el objetivo constitucional asignado.

En el artículo 5 del Decreto 2085 de 2019, se establece que:

> ***"ARTÍCULO 5****. En ejercicio de su autonomía presupuestal el Consejo Nacional Electoral tendrá la capacidad de contratar y ordenar el gasto. Estas facultades estarán en cabeza del presidente del Consejo y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes."*

A su vez, el artículo 26 del referido Decreto indica que:

> ***"ARTÍCULO 26.*** *Régimen contractual. El Consejo Nacional Electoral como entidad estatal del orden nacional, en sus procesos de contratación se regirá por la Ley 80 de 1993 y por las disposiciones que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan..."*

En este orden, para superar la transitoriedad de funcionamiento del CNE como unidad ejecutora, la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "*Colombia Potencia mundial de vida*", establece que, el Consejo Nacional Electoral será una sección del Presupuesto Nacional que tendrá la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, así:

> ***"ARTÍCULO 336°.*** *El artículo 23 de la Ley 38 de 1989 modificado por el artículo 16 Ley 179 de 1994, compilado en el artículo 36 del Decreto 111 de 1996, quedará de la siguiente manera y modificará las correspondientes enumeraciones que se hagan en el presupuesto:*
>
> ***ARTÍCULO 36.*** *El presupuesto de gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión. Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones que corresponderán a: la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, una (1) por cada ministerio, departamento administrativo y establecimientos públicos, una (1) para la policía nacional y una (1) para el servicio de la deuda pública. En el proyecto de presupuesto de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversión, clasificados según lo determine el Gobierno. En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrán incluir gasto con destino al servicio de la deuda. (L. 38/89, art 23; L.179/94, art.16)"*
>
> ***ARTÍCULO 337°.*** *El artículo 91 de la Ley 38 de 1989, modificado por el artículo 51 de la Ley 179 de 1994, compilado en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 quedará de la siguiente manera:*
>
> ***ARTÍCULO 110****. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes.*
>
> *En la sección correspondiente a la rama legislativa estas capacidades ejercerán en la forma arriba indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de*

Representantes; igualmente, en la sección correspondiente a la rama judicial serán ejercidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura igualmente en el caso de Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría Ejecutiva de la misma, y en el Consejo Nacional Electoral por el Presidente de este órgano.

En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades la Superintendencias, unidades administrativas especiales, las entidades territoriales, asambleas y concejos, las contralorías y personerías territoriales y todos los demás órganos estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica.

En todo caso, el presidente de la República podrá celebrar contratos a nombre de la Nación (L.38/89, art. 91; L.179/94, art. 51)"

Es así como, el Decreto 957 del 16 de junio de 2023 expedido por la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, desarrolla los precitados artículos 336 y 337 de la Ley No. 2294 de 2023, disponiendo así:

"Artículo 2º *"(…) Efectuada la incorporación de los recursos en la sección presupuestal del Consejo Nacional Electoral, el ordenador del gasto tendrá la capacidad de contratar y comprometer los recursos en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección" (resaltado fuera de texto).*
No obstante, mediante la Sentencia C-116 de 2026 (expediente D-15.963, M.P. Juan Carlos Cortés González), la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023, dispuso la reviviscencia de las normas de la Ley 38 de 1989 que estos habían modificado y difirió los efectos de la decisión al 1.º de enero de 2027. En consecuencia, durante la vigencia fiscal 2026 el Consejo Nacional Electoral conserva la capacidad de contratar, comprometer y ordenar el gasto con cargo a su sección presupuestal, y con fundamento en ella se adelanta el presente proceso.

Como esa capacidad no se extiende más allá del 31 de diciembre de 2026, el contrato se estructura para que la prestación de los servicios, su recibo a satisfacción y su pago se cumplan dentro de la presente vigencia, sin comprometer vigencias futuras. Las actuaciones posteriores a esa fecha —liquidación, seguimiento de garantías y pago de obligaciones que eventualmente queden pendientes— corresponderán a la autoridad que asuma la ordenación del gasto conforme al régimen revivido y a las adecuaciones normativas ordenadas por la Corte. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: la Dirección de Gestión Corporativa debe confirmar el tratamiento presupuestal que se dará a los servicios prestados en los últimos días de la vigencia.

En línea con los esfuerzos realizados por la Entidad en el marco del desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal, el CNE adoptó, mediante Resolución 1040 del 24 de marzo de 2021, la Plataforma Estratégica y Mapa de Procesos que permite dirigir la gestión de la Entidad a partir de los siguientes objetivos estratégicos:

"Artículo Primero. (…) Objetivos Estratégicos:

1. Promocionar la cultura democrática.
2. Fortalecer la participación política.
3. Promover la confianza ciudadana.
4. Trabajar por el reconocimiento institucional"

Dichos objetivos planteados promueven la consolidación del CNE como una entidad sostenible, democrática, eficiente, confiable y de alto rendimiento; impulsando decididamente la eficacia del sistema electoral en nuestro país para garantizar la participación equitativa y soberana de todos los colombianos, en aras de un incremento sostenible en términos de modernidad, agilidad y transparencia de los eventos electorales, respondiendo con calidad en la prestación de nuestros servicios y la transparencia en las actuaciones misionales y transversales.

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

El presente proceso de contratación se fundamenta en la obligación jurídica, constitucional e institucional que tiene el Estado colombiano, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), de garantizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la oposición, conforme a lo establecido en la Ley Estatutaria 1909 de 2018 "**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN EL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y ALGUNOS DERECHOS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS INDEPENDIENTES".** Esta normativa desarrolla los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, al reconocer, promover y proteger el derecho de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno, garantizando su participación en condiciones de igualdad dentro del sistema democrático.

En este sentido, corresponde al Consejo Nacional Electoral adoptar las medidas administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos por el Estatuto de la Oposición, particularmente aquellos relacionados con el acceso a los medios de comunicación social del Estado y a los que hacen uso del espectro electromagnético, como instrumentos esenciales para la difusión de las posiciones políticas de las organizaciones declaradas en oposición y para el fortalecimiento del pluralismo político.

Para hacer efectivas las garantías de acceso a medios de comunicación establecidas en el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, se requiere de un despliegue técnico especializado que desborda el alcance de la entidad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) es un órgano de origen constitucional cuya misionalidad está estrictamente orientada a la inspección, vigilancia y control de la organización electoral, así como a la regulación de la actividad política y la garantía de los derechos de la oposición; por lo tanto, dentro de su estructura institucional y funcional, no cuenta con la capacidad técnica ni la infraestructura tecnológica requerida para la emisión de piezas audiovisuales y radiales en el espectro electromagnético, pauta y monitoreo de medios.

El CNE no cuenta con herramientas especializadas, para el control de medios ni para negociar, programar y supervisar espacios en canales de televisión y estaciones de radio a nivel nacional, regional o local. En consecuencia, al no poder ejecutar directamente estas actividades por imposibilidad fáctica, operativa y técnica, y con el fin de optimizar los

recursos públicos bajo los principios de eficacia y eficiencia de la función administrativa, se hace estrictamente necesario contratar los servicios de un operador que gestione las acciones tendientes a otorgar espacios adicionales en medios de comunicación a organizaciones políticas que ejercen su derecho fundamental a la oposición en el nivel nacional.

Esta contratación permite optimizar recursos públicos al concentrar en un único operador especializado la planeación operativa, negociación, compra, programación, monitoreo, verificación y documentación de los espacios con los distintos medios de comunicación, disminuyendo costos administrativos, tiempos de gestión y riesgos operativos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la citada ley, las organizaciones políticas declaradas en oposición tienen, entre otros, el derecho de acceder a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético. En desarrollo de esta garantía, el artículo 13 del Estatuto de la Oposición establece lo siguiente1:

> *"Acceso a los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético. Sin perjuicio de los espacios institucionales para la divulgación política otorgados a todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la Autoridad Electoral asignará entre las organizaciones políticas con representación en las corporaciones públicas de elección popular que se declaren en oposición, espacios adicionales en medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético. Para radio y televisión, se hará de la siguiente manera:*
>
> *a) Asignará, en cada canal de televisión y emisora, al menos 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía.*
> *b) Determinará la duración, frecuencia y fechas de emisión de los espacios, con el apoyo técnico de la Autoridad Nacional de Televisión y del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, según sea el caso.*
> *c) Para el ejercicio de la oposición al Gobierno nacional, se asignarán solamente en medios de comunicación con cobertura nacional. Para el ejercicio de la oposición a nivel territorial, se asignarán espacios de acuerdo con la cobertura y correspondencia de los medios con el nivel territorial.*
> *d) El cincuenta por ciento (50%) del tiempo se asignará en partes iguales, y el otro cincuenta por ciento (50%) con base en el número de escaños que tenga cada organización en el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales, según corresponda.*
> *e) El costo de los espacios será asumido con cargo al Presupuesto General de la Nación, para lo cual se apropiarán anualmente las partidas necesarias.*

---

[1] Se aclara que, el Estatuto de la Oposición menciona a la Autoridad Nacional de Televisión como un apoyo técnico a la hora de determinar la duración, frecuencia y fechas de emisión de los espacios. Sin embargo, dicha entidad fue liquidada en 2019 y sus funciones fueron distribuidas entre el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio.

> *f) Para las concesiones o títulos que se asignen, renueven o prorroguen a partir de la vigencia de esta ley, los tiempos necesarios para el cumplimiento de lo aquí ordenado constituye una obligación especial del servicio a cargo de los concesionarios u operadores.*
> *g) En los espacios otorgados para divulgación política en los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético, las organizaciones políticas deberán garantizar la participación paritaria entre hombres y mujeres.*
> *h) La Autoridad Electoral reglamentará la materia".*

En efecto, en ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada en el literal h) del artículo 13 del Estatuto y con fundamento en el artículo 16 del Decreto No. 2085 de 2019 -Por el cual se establece la estructura orgánica e interna del Consejo Nacional Electoral-, se han adoptado los lineamientos para la garantía y protección de los derechos consagrados en el Estatuto de la Oposición, así como las medidas de vigilancia e inspección necesarias.

Por consiguiente, el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución No. 3134 del 14 de diciembre de 2018: "*Por medio de la cual se reglamentan algunos aspectos de la Ley Estatutaria 1909 del 9 de julio de 2018, que consagra el Estatuto de la Oposición, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición, y de las organizaciones políticas independientes".*

Posteriormente, a través de la Resolución No. 3941 del 13 de agosto de 2019, el CNE modificó la reglamentación del Estatuto y con respecto al acceso a medios de comunicación estableció lo siguiente:

> *"Artículo 12. Acceso a los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético. Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición serán objeto de distribución de espacios adicionales en medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético, así:*

a) *Canales abiertos de televisión* (Corresponden al servicio público de televisión con cobertura en todo el territorio nacional, operado por concesionarios privados (Caracol y RCN) y operadores públicos (RTVC/Canal Uno).

- *Al menos 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía, para el ejercicio de la oposición del gobierno.*
- *En medios de comunicación con cobertura nacional para el ejercicio de la oposición del gobierno nacional.*

Para su ejercicio en el nivel territorial se asignará de acuerdo con la cobertura y correspondencia de los medios con el nivel territorial.

b) *Radio* (Es el servicio de radiodifusión sonora orientado a la cobertura de áreas geográficas específicas a nivel departamental o local.)

- Al menos 30 minutos mensuales en las franjas de mayor audiencia de cada emisora, las cuales podrán variar de acuerdo con la programación de éstas.
- El Ejercicio de la oposición al Gobierno Nacional se realizará a través de las emisoras asignadas a Radio Nacional de Colombia.

Para su ejercicio en el nivel territorial, si bien estas no están obligadas a conceder los espacios de 2 minutos institucionales para la divulgación política a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, si lo estarán para conceder los 30 minutos previstos en esta norma para el ejercicio del derecho de la oposición, los cuales se asignarán, a nivel municipal, de acuerdo con el municipio para el cual se otorgó la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

En todo caso, solo se asignarán los espacios a que se refiere el presente artículo cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para ello, para lo cual en cada anualidad el Consejo Nacional Electoral deberá hacer la solicitud respectiva a través de la Asesoría Administrativa ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que deberá incluirla en el proyecto de Presupuesto que el Gobierno Nacional presente a consideración del Congreso de la República, para incluirla en la ley que adopte el Presupuesto General de Ingresos y Gastos para cada vigencia fiscal."[2]

Ahora bien, con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la asignación de espacios en medios de comunicación social a los partidos y movimientos políticos declarados en oposición, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1909 de 2018 y su reglamentación, resulta pertinente exponer las gestiones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para la obtención y apropiación de dichos recursos. En este sentido, a continuación, se presentan, en orden cronológico, las actuaciones y requerimientos presupuestales realizados por esta Corporación:

1.1.1. Gestiones presupuestales desplegadas por el CNE como Sección Presupuestal del Presupuesto General de la Nación para dar cumplimiento al Estatuto de la Oposición.

Para la vigencia 2026, el Consejo Nacional Electoral adelantó las gestiones presupuestales necesarias para garantizar la financiación de los espacios adicionales en medios de comunicación destinados a los partidos y movimientos políticos declarados en oposición, en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de la Oposición. Inicialmente, proyectando la necesidad de recursos en su anteproyecto de presupuesto anual, monto que no fue incluido por la autoridad fiscal dentro del Decreto de Liquidación de Presupuesto (Decreto 1477 de 2025). En ese sentido, el 12 de febrero de 2026 se radicó, a través de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitud de recursos por valor de **QUINIENTOS**

[2] Así mismo, las decisiones judiciales constituyen un elemento adicional que evidencia la necesidad institucional del proceso, sin constituir el único fundamento de la contratación.

TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($539.044.014.867).

En respuesta, mediante comunicación del 25 de febrero de 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó la imposibilidad de atender favorablemente la solicitud, indicando que la asignación de recursos a las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación debe sujetarse a *"(...) normas orgánicas orientadas a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y debe ser consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, que se constituyen en parámetros obligatorios para el ejercicio presupuestal (...)*

Posteriormente, y con el propósito de insistir en la necesidad de contar con los recursos *-al menos de forma parcial-* requeridos para el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del Estatuto de la Oposición, el Consejo Nacional Electoral el **14 de abril de 2026** radicó una nueva solicitud ante dicha cartera ministerial por valor de **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($82.682.703.616)**.

El **5 de mayo de 2026,** mediante radicado No 2-2026-033801 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Nacional Electoral fue notificado de la aprobación de recursos adicionales, así mismo el Ministerio expidió la resolución No. 0876 de 2026, de modificación del decreto de liquidación.

Posteriormente, el **16 de julio de 2026** el Consejo Nacional Electoral radicó un presupuesto adicional en el rubro A-02 adquisición de bienes y servicios por valor de **SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($67.317.296.384),** el cual permitirá inyectar recursos al proceso de contratación y se ejecutará a través de la modalidad de monto agotable, llevando la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 y previendo los nuevos partidos y movimientos que se declaren en oposición al gobierno nacional y departamental. Este ejercicio se enfocó en la priorización del gasto, la optimización de los recursos disponibles y el fortalecimiento de la planeación financiera, en armonía con los principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad fiscal, promoviendo así una gestión responsable y transparente en beneficio del interés general.

De ahí que, el **04 de agosto de 2026** mediante el Radicado 2-2026-055843, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó que, mediante la Resolución No. 1750 del 03 de agosto de 2026, "*Por la cual se efectúa una modificación al Anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2026",* se adicionaron recursos por el valor mencionado, acreditándolos en el objeto de gasto *"A-02 Adquisición de bienes y servicios"*, con recurso 11, del Consejo Nacional Electoral – CNE.

Fundamentados en los **OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE**

($82.682.703.616), asignados por el Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional Electoral – CNE inició el 16 de julio de 2026 el proceso de selección de Licitación Pública No. **LP-CNE-002-2026,** cuyo objeto es: "*Prestar los servicios de Agencia Central de Medios para la planeación, gestión, negociación, monitoreo y verificación de espacios en medios de comunicación destinados al ejercicio del derecho fundamental a la oposición política a nivel nacional y departamental de conformidad con lo establecido en la ley 1909 de 2018 y las disposiciones que reglamenten, modifiquen o adicionen"* el cual fue aprobado en el Comité Asesor de Contratación de la Entidad No. 19 del 16 de julio de 2026.

Este proceso de selección se encontraba respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7426 del 6 de agosto de 2026 expedido por la Dirección de Gestión Corporativa – Gestión Financiera y Presupuestal del Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, en la fecha establecida para publicar la evaluación preliminar de las ofertas, esto es, 03 de septiembre de 2026, la Dirección de Gestión Corporativa recibió vía correo electrónico con asunto: "Apropiación Bloqueada" por parte de la asesoría del Grupo Interno de Gestión Presupuestal y Financiera, en donde se informó que el CDP No. 7426, cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE AGENCIA CENTRAL DE MEDIOS PARA LA PLANEACIÓN, GESTIÓN, NEGOCIACIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESTINADOS AL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA OPOSICIÓN POLÍTICA A NIVEL NACIONAL", presentaba un bloqueo por valor de **$16.631.401.455.**

Esta situación imposibilitaba comprometer la totalidad del valor inicialmente asignado al citado CDP, correspondiente a **$82.682.703.616,** toda vez que el valor objeto del bloqueo no se encontraba disponible para su afectación presupuestal.

En consecuencia, mediante Resolución Administrativa No. 1812 del 03 de septiembre de 2026, resultó procedente y necesario revocar directamente la Resolución No. 1646 del 06 de agosto de 2026, mediante la cual se ordenó la apertura del proceso de selección de Licitación Pública No. LP-CNE-002-2026, con el propósito de evitar la continuación de un procedimiento cuya estructuración presupuestal perdió vigencia material como consecuencia de un hecho sobreviniente, imprevisible, irresistible, insuperable y ajeno a la voluntad del CNE.

La Resolución Administrativa No. 1812 del tres (3) de septiembre de 2026 cuenta con constancia de ejecutoria de fecha veintitrés (23) de septiembre de 2026.

1.1.2. Acciones judiciales por incumplimiento de los artículos 40 y 112 de la C.P. y artículo 13 de la Ley 1909 de 2018 (Derecho fundamental a la Oposición)

En el marco del cumplimiento de los artículos 40 y 112 de la Constitución Política y del artículo 13 de la Ley 1909 de 2018 —Estatuto de la Oposición—, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido objeto de requerimientos judiciales orientados a garantizar el acceso

efectivo de las organizaciones políticas declaradas en oposición a los medios de comunicación social del Estado y a aquellos que hacen uso del espectro electromagnético.

Durante los meses de abril y mayo de 2025, mediante oficios No. 300 y 421, el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá D.C. requirió al Consejo Nacional Electoral para adelantar las acciones necesarias tendientes a materializar el acceso a medios de comunicación por parte de las organizaciones políticas que ejercen su derecho fundamental a la oposición, en los términos establecidos en la Ley 1909 de 2018.

Lo anterior, en el marco del seguimiento periódico que realiza el despacho judicial, orientado a prevenir que se reiteren las circunstancias fácticas y jurídicas sobre las cuales la Corte Constitucional ya se pronunció en la Sentencia de Unificación SU - 347 de 2023 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger, expediente T-9.276.067) en cumplimiento del fallo de tutela, emitiendo argumentos con relación al actuar del CNE para la materialización del derecho fundamental a la oposición:

> *"(…) Inadmisibilidad de actitudes pasivas o dilatorias frente a la protección y garantía del derecho a la oposición.*
>
> *(…) En relación con la garantía de acceso a espacios adicionales en medios de comunicación del Estado y que hacen uso del espectro electromagnético, es importante destacar que existe un «título de gasto complejo» que hace* ***inadmisible las actitudes pasivas o dilatorias por parte de las entidades que tienen la responsabilidad de asegurar su materialización.***
>
> *En efecto, como se ha señalado de manera reiterada en esta providencia y en la jurisprudencia constitucional, el acceso a los medios de comunicación es una garantía de la oposición que tiene fundamento constitucional (artículo 112) y, gracias a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final, fue desarrollada por el legislador estatutario, mediante el artículo 13 de la Ley 1909 de 2018.*
>
> *(…)* ***De lo contrario, entraríamos en un círculo vicioso: el vencedor en las elecciones y que, por ende, detenta el poder político impide que el vencido, que ejerce la oposición política, cuente con las garantías que la Constitución y la ley estatutaria le ofrecen para el desarrollo de su labor, fundamental para la democracia; de tal manera que, al invertirse los resultados de las elecciones en comicios futuros, el anterior opositor y, ahora gobernante, replicará la exclusión que sufrió****. La Corte Constitucional no puede, de ninguna manera, tolerar este tipo de comportamientos que llevan al fracaso de la democracia como mecanismo para superar las diferencias y buscar el bien común (…) En este contexto, es importante reiterar que todas las autoridades estatales, dentro de las que, por supuesto están el CNE y el MHCP, tienen el deber de cumplir de buena fe el Acuerdo Final." (Subrayado fuera del texto original)*

Posteriormente, mediante auto del 28 de abril de 2026, dentro de la acción de tutela radicada bajo el No. 11001310502320220046400, promovida por el Partido Político Centro Democrático, el citado despacho judicial requirió nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional Electoral para informar las acciones implementadas

respecto de la financiación y garantía de acceso a medios de comunicación para la vigencia 2026.

En atención a lo anterior, para la vigencia 2026 el Consejo Nacional Electoral adelantó las gestiones presupuestales relacionadas en el numeral 1.1.1. del presente estudio previo y las cuales fueron aprobadas por la cartera ministerial.

No obstante, frente al cumplimiento de las órdenes judiciales en referencia, resulta pertinente señalar que el Consejo Nacional Electoral garantizó previamente la continuidad de este servicio mediante el contrato CPS-CNE-017-2025, suscrito con la Unión Temporal UT POR EL CNE 2025, cuyo valor total ejecutado ascendió a **ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($11.219.973.483)**, incluidos IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. Dicho marco contractual garantizó la materialidad del derecho fundamental a la oposición en el nivel nacional, pues de forma gradual el CNE ha tenido que sujetarse a la sostenibilidad fiscal atribuida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin limitarse a la pasividad juzgada en contra de esta Corporación en la Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional (SU 347 de 2023).

Agotados los recursos del contrato anterior y contando con la actual apropiación presupuestal para la vigencia 2026, se hace indispensable adelantar un nuevo proceso contractual con el fin de garantizar la continuidad en la asignación de espacios adicionales en medios de comunicación a los partidos y movimientos políticos declarados en oposición a nivel nacional, siguiendo la misma línea de gradualidad por la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Hacienda.

Dicha necesidad exige la prestación de servicios especializados para la planeación operativa, negociación, compra, programación, monitoreo, verificación y documentación de los espacios con los distintos medios de comunicación, actividades que exceden la capacidad operativa del Consejo Nacional Electoral y que requieren el apoyo de un operador con experiencia, capacidad técnica, infraestructura tecnológica y cobertura nacional.

Actualmente, el Consejo Nacional Electoral no cuenta dentro de su planta de personal con cargos especializados en compra de medios, negociación nacional de pauta, monitoreo de emisiones ni herramientas tecnológicas para certificación de emisiones, razón por la cual resulta imposible atender directamente la necesidad.

En consecuencia, el presente proceso contractual resulta necesario para asegurar el cumplimiento efectivo de los mandatos constitucionales, legales y judiciales relacionados con la garantía del derecho fundamental a la oposición.

2. OBJETO Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

2. OBJETO

Prestar los servicios para la negociación, programación, monitoreo, verificación y documentación de los espacios en medios de comunicación social del Estado y en medios que hacen uso del espectro electromagnético, en favor de las organizaciones políticas declaradas en oposición en el nivel nacional, en cumplimiento de la Ley 1909 de 2018 y de su reglamentación.

2.1. ALCANCE DEL OBJETO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1909 de 2018 – Estatuto de la Oposición, corresponde al Consejo Nacional Electoral garantizar a las organizaciones políticas declaradas en oposición el acceso a medios de comunicación social del Estado y a aquellos que hacen uso del espectro electromagnético, mediante la asignación de espacios destinados al ejercicio efectivo de este derecho fundamental.

Para tal efecto, el contratista deberá prestar los servicios para la planeación operativa, negociación, programación, monitoreo, verificación y documentación de los espacios en medios de comunicación requeridos por el Consejo Nacional Electoral, gestionando la emisión de los minutos que el CNE asigne a las organizaciones políticas declaradas en oposición con cargo a los recursos del contrato —estimados en treinta (30) minutos por cada canal de televisión y treinta (30) minutos en Radio Nacional de Colombia durante el plazo de ejecución, según los precios de referencia del estudio de mercado—, de conformidad con la distribución que determine la Entidad y con las disposiciones establecidas en la Ley 1909 de 2018 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen.

La ejecución del contrato comprenderá la negociación, programación, monitoreo, verificación y documentación de los espacios en medios de comunicación social del Estado y en medios que hacen uso del espectro electromagnético, incluyendo, entre otras actividades, la identificación de medios idóneos, la reserva y programación de espacios, la coordinación operativa con los medios de comunicación, el seguimiento a las emisiones, la certificación de la pauta efectivamente transmitida y la presentación de los soportes e informes que permitan corroborar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.

En desarrollo del contrato, el Consejo Nacional Electoral suministrará la distribución de tiempos y espacios que corresponda a cada organización política declarada en oposición.

Con base en dicha distribución, el proveedor del servicio deberá gestionar la emisión de los espacios asignados en los diferentes medios de comunicación, garantizando el cumplimiento de las condiciones de cobertura, oportunidad, calidad y trazabilidad requeridas por la Entidad.

Sin perjuicio de los treinta (30) minutos mensuales mínimos establecidos en el Estatuto de la Oposición, el Consejo Nacional Electoral podrá autorizar la asignación de espacios adicionales, siempre que exista disponibilidad presupuestal y se garantice previamente el cumplimiento de las obligaciones mínimas previstas en la normatividad vigente.

El contratista seleccionado actuará exclusivamente para la gestión integral de los espacios definidos por el Consejo Nacional Electoral, sin facultad para modificar la distribución de tiempos, organizaciones beneficiarias ni condiciones fijadas por la Entidad.

Es importante anotar en este punto que, el artículo 112 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 2003 y el artículo 3° de la Ley 1909 de 2018, consagra la oposición política como *"...un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas".* Este derecho fundamental se debe garantizar de forma ininterrumpida por el CNE, garantizando que las gestiones administrativas, contractuales y presupuestales se establezcan de forma amplia y en el marco de las condiciones técnicas establecidas en el Estatuto de la Oposición.

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto del presente proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios – UNSPSC- así:

Segmento	Familia	Clase	Producto
82000000	82100000	82101600	82101601
82000000	82100000	82101600	82101602
82000000	82100000	82101800	82101801
82000000	82100000	82101900	82101901
82000000	82100000	82101900	82101902
83000000	83110000	83121700	83121701
83000000	83110000	83121700	83121702

2.3 CONDICIONES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO:

2.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El servicio deberá garantizar la gestión integral de los espacios en medios de comunicación social del Estado y en aquellos que hacen uso del espectro electromagnético que sean asignados u ordenados por el Consejo Nacional Electoral como la autoridad electoral para garantizar los derechos de las organizaciones políticas declaradas en oposición, de conformidad con la Ley 1909 de 2018 y su reglamentación.

Para tal efecto, el servicio comprenderá, como mínimo, los siguientes componentes:

2.3.1.1 NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Comprende la gestión comercial, administrativa y operativa necesaria para disponer de los espacios requeridos para la divulgación de los contenidos de las organizaciones políticas declaradas en oposición, de conformidad con las órdenes, requerimientos y condiciones que determine el Consejo Nacional Electoral.

El contratista deberá:

a) Gestionar ante los siguientes medios de comunicación de cobertura nacional: **Caracol Televisión, RCN Televisión, Canal Uno, RTVC y las emisoras de Radio Nacional de Colombia** la disponibilidad de los espacios requeridos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la divulgación de los contenidos de las organizaciones políticas declaradas en oposición.
b) Gestionar la adquisición de los espacios en medios de comunicación que generen costos con cargo al contrato, conforme a las tarifas, condiciones comerciales y valores previamente aprobados por el CNE, garantizando el cumplimiento de las autorizaciones impartidas por la Entidad.
c) Garantizar que los espacios gestionados se emitan o transmitan a través de medios de comunicación con cobertura nacional, de conformidad con las condiciones establecidas para el ejercicio del derecho de oposición al Gobierno nacional.
d) Presentar al supervisor del contrato, para su aprobación previa, la programación de los espacios de divulgación, indicando como mínimo: nombre del medio de comunicación, cobertura, canal o frecuencia, programa o franja horaria, duración, fecha y hora de emisión o transmisión y valor correspondiente.
e) Coordinar directamente con los medios de comunicación la expedición y ejecución de órdenes de servicio, reserva y programación de espacios, así como las modificaciones o reprogramaciones que resulten necesarias, previa autorización del supervisor cuando corresponda, con el fin de garantizar la efectiva emisión o transmisión de los contenidos ordenados por el CNE.

2.3.1.2 PROGRAMACIÓN DE LA DIVULGACIÓN:

Comprende la planeación, coordinación y programación de los espacios en medios de comunicación destinados a la divulgación de los contenidos de las organizaciones políticas declaradas en oposición, conforme a las asignaciones, instrucciones y condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La programación deberá garantizar la identificación, organización y seguimiento de cada emisión o transmisión, de acuerdo con las condiciones previamente aprobadas por la Entidad.

El contratista deberá:

a) Elaborar, presentar y mantener actualizado un plan de medios que incluya la totalidad de los espacios de divulgación ordenados o asignados por el CNE, conforme a las condiciones aprobadas por la supervisión del contrato.

b) Registrar en el plan de medios, para cada divulgación, como mínimo: organización política beneficiaria, medio de comunicación, cobertura, canal o frecuencia, fecha, hora, franja de emisión, duración, número de emisiones o transmisiones y demás condiciones establecidas por el CNE.

c) Coordinar con los medios de comunicación la recepción y entrega oportuna de las piezas audiovisuales o sonoras suministradas por cada organización política y previamente autorizada por el CNE, para su emisión o transmisión, conforme a la programación aprobada.

d) Verificar, antes de cada emisión o transmisión, que las piezas suministradas por cada organización política cumplan con los formatos, duración y especificaciones técnicas exigidas por el respectivo medio de comunicación, e informar oportunamente al CNE cualquier inconsistencia que pueda afectar su divulgación.

e) Gestionar con los medios de comunicación los ajustes operativos y las reprogramaciones que resulten necesarios por novedades o situaciones que afecten la divulgación prevista, previa autorización de la supervisión del contrato.

f) Disponer de la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para atender los requerimientos extraordinarios del CNE relacionados con eventos no programables, especialmente los derivados dentro de los términos establecidos en la Ley 1909 de 2018 y demás disposiciones aplicables.

g) Implementar y mantener actualizado un mecanismo de seguimiento y trazabilidad que permita consultar el estado de cada orden de divulgación, desde su recepción hasta la efectiva emisión o transmisión, incluyendo las modificaciones, reprogramaciones, novedades y resultados de su verificación.

2.3.1.3 MONITOREO DE LA DIVULGACIÓN:

Comprende el seguimiento técnico a las emisiones y transmisiones de los contenidos ordenados o asignados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de verificar su efectiva divulgación y el cumplimiento de las condiciones previamente aprobadas por la Entidad.

Para ello, el contratista deberá disponer de las herramientas tecnológicas y de los recursos humanos y operativos necesarios para realizar el monitoreo de los medios de comunicación objeto del contrato, garantizando la generación, conservación y disponibilidad de las evidencias correspondientes.

El contratista deberá:

a) Monitorear las emisiones y transmisiones ordenadas por el CNE, identificando el medio de comunicación, canal o frecuencia, programa o franja horaria y cobertura geográfica correspondiente.

b) Registrar la fecha, hora real de inicio y finalización, así como la duración efectiva de cada emisión o transmisión, y contrastar esta información con la programación previamente aprobada.

c) Identificar y documentar las emisiones o transmisiones no realizadas, incompletas, interrumpidas, reprogramadas o efectuadas en condiciones diferentes a las autorizadas por el CNE.

d) Informar oportunamente a la supervisión del contrato sobre los incumplimientos, inconsistencias o novedades detectadas durante el monitoreo, adjuntando las evidencias correspondientes.

e) Generar y conservar grabaciones audiovisuales o sonoras, según corresponda, que permitan comprobar la efectiva emisión o transmisión de cada contenido, identificando el medio, la fecha, la hora y la duración.

f) Disponer de un sistema o herramienta tecnológica que permita consultar los registros históricos de las emisiones y transmisiones monitoreadas, así como sus respectivas evidencias, durante la ejecución contractual.

g) Realizar el monitoreo mediante mecanismos de verificación independientes de las certificaciones o constancias expedidas por los medios de comunicación, con el fin de contar con soportes adicionales que acrediten la efectiva divulgación.

h) Generar un registro de cumplimiento por cada orden de divulgación, clasificando su estado, como mínimo, en las siguientes categorías:

- Cumplida.
- Cumplida con novedad.
- Reprogramada.
- No emitida o no transmitida.
- Pendiente de verificación.

i) Gestionar ante los respectivos medios de comunicación las aclaraciones, correcciones o reposiciones que correspondan cuando se identifiquen diferencias entre las condiciones aprobadas y las efectivamente ejecutadas, previa autorización o instrucción de la supervisión del contrato.

j) Presentar a la supervisión los reportes de monitoreo y verificación, acompañados de las evidencias técnicas que permitan establecer cuáles emisiones o transmisiones fueron efectivamente realizadas y cumplen las condiciones contractuales para su reconocimiento económico.

Los resultados del monitoreo y las evidencias correspondientes constituirán soportes técnicos para la verificación de los servicios efectivamente prestados. El reconocimiento económico estará sujeto a la comprobación de la emisión o transmisión, al cumplimiento de las condiciones contractuales y al recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato.

2.3.1.4 DOCUMENTACIÓN, EVIDENCIA Y TRAZABILIDAD

Comprende la generación, organización, conservación y entrega al CNE de los soportes que acrediten la gestión y efectiva divulgación de los contenidos en los medios de comunicación.

Para cada emisión o transmisión deberá conformarse un expediente o registro digital que contenga, como mínimo:

a) Orden, solicitud o instrucción emitida por el CNE.
b) Identificación de la organización política beneficiaria.
c) Identificación del medio de comunicación.
d) Orden de servicio o documento equivalente.
e) Parrilla o programación aprobada.
f) Fecha, hora, franja y duración programadas.
g) Evidencia de la efectiva emisión o transmisión.
h) Grabación, archivo audiovisual, sonoro o evidencia técnica equivalente que permita comprobar la divulgación.
i) Certificado de emisión, transmisión o documento equivalente expedido por el medio, cuando corresponda.
j) Reporte generado por el sistema o herramienta independiente de monitoreo.
k) Registro de novedades, modificaciones o reprogramaciones, cuando se hayan presentado.
l) Los demás documentos que determine el CNE o la supervisión del contrato.

La información deberá estar organizada en un repositorio digital que permita realizar búsquedas y generar reportes por medio, organización política, departamento, municipio cuando corresponda, fecha, tipo de derecho ejercido, orden de divulgación, estado de cumplimiento y valor.

2.3.1.5 REPORTES Y TABLERO DE CONTROL

Como componente transversal, el contratista deberá suministrar una herramienta o mecanismo tecnológico de seguimiento que permita al CNE consultar la ejecución de los servicios de divulgación.

El tablero deberá permitir visualizar, como mínimo:

* Número de órdenes de divulgación recibidas.
* Número de emisiones o transmisiones programadas.
* Número de emisiones o transmisiones efectivamente realizadas.
* Minutos programados y minutos efectivamente divulgados.
* Distribución por organización política.
* Distribución por medio de comunicación.
* Distribución por tipo de medio.
* Distribución nacional.
* Valor comprometido.
* Valor ejecutado.

* Saldo disponible.
* Emisiones o transmisiones pendientes.
* Novedades e incumplimientos detectados.
* Reprogramaciones efectuadas.
* Evidencias y soportes asociados a cada registro.

El contratista deberá entregar informes periódicos de ejecución y los informes extraordinarios que solicite la supervisión, incluyendo las bases de datos en formatos editables y reutilizables.

Para el tablero de control no se exige un desarrollo de software a la medida ni una plataforma o marca específica; El contratista podrá utilizar una solución tecnológica existente, un Excel, un dashboard, o cualquiera que cumpla las funcionalidades requeridas. Será suficiente habilitar el acceso de consulta al CNE durante la ejecución contractual, sin exigir la cesión de licencias a nombre de la Entidad, y garantizar la entrega de las bases de datos en formatos editables y reutilizables.

2.3.1.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIAL DE LA EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS:

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, solicitó el 1 de octubre de 2026 a Caracol Televisión, RCN Televisión, Canal Uno y RTVC – Sistema de Medios Públicos, para sus servicios de radio y televisión, las especificaciones técnicas requeridas para la emisión y transmisión de los contenidos de las organizaciones políticas declaradas en oposición.

Las respuestas remitidas por cada medio de comunicación, junto con sus respectivas especificaciones técnicas, se encuentran incorporadas como **anexos** al presente documento y deberán ser tenidas en cuenta por las organizaciones políticas para la producción y entrega de los materiales audiovisuales y sonoros destinados a su posterior emisión o transmisión.

Relación de comunicaciones oficiales

Fecha de radicación y envío: 1 de octubre de 2026.

- **Anexo 1: Caracol Televisión:** CNE-S-2026-003969-OCE-300.
- **Anexo 2: RCN Televisión:** CNE-S-2026-003971-OCE-300.
- **Anexo 3: Canal Uno:** CNE-S-2026-003967-OCE-300.
- **Anexo 4: RTVC – Televisión:** CNE-S-2026-003975-OCE-300.
- **Anexo 5: RTVC – Radio Nacional de Colombia:** CNE-S-2026-003974-OCE-300.

Las comunicaciones oficiales y las respuestas de los respectivos medios forman parte integral de las condiciones técnicas del presente estudio previo y servirán como referencia

para verificar que los materiales suministrados por las organizaciones políticas cumplan con las condiciones técnicas exigidas para su efectiva emisión o transmisión.

2.3.1.7 FRANJA DE EMISIÓN (PRIME TIME) Y HORARIOS APLICABLES POR MEDIO

El proponente deberá contemplar las siguientes franjas horarias y medios de comunicación:

1. Televisión nacional:

Para los canales Caracol Televisión, RCN Televisión y Canal 1, se deberá cotizar en la franja *prime time*, conforme a los siguientes horarios:

- **Lunes a viernes:** de 7:00 p. m. a 10:30 p. m.
- **Sábados, domingos y festivos:** de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Para los canales de televisión de INRAVISIÓN, se deberá contemplar el horario comprendido entre las **7:00 p. m. y las 8:00 p. m.**

2. Radio:

Para efectos de la oferta económica, únicamente deberán contemplarse las emisoras que integran la Radio Nacional de Colombia, operadas por INRAVISIÓN, sin incluir emisoras comerciales ni otras que no pertenezcan a dicha red.

Las franjas horarias que deberán considerarse son:

- **Franja de la mañana:** de 6:00 a. m. a 8:00 a. m.
- **Franja de la tarde:** de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

En consecuencia, los proponentes deberán estructurar su oferta económica teniendo en cuenta exclusivamente los medios y horarios anteriormente señalados, de conformidad con las condiciones establecidas por la Entidad para el presente proceso de selección.

2.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN

N/A

2.5 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

N/A

2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios será **hasta el agotamiento de los recursos asignados o lo que se ejecute hasta el 28 de diciembre de 2026**, o lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor designado por el Consejo Nacional Electoral.

La ejecución del contrato estará supeditada a la expedición del respectivo registro presupuestal, la aprobación de las garantías exigidas y la verificación, por parte del supervisor del contrato, del cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, cuando haya lugar.

2.7 PRESUPUESTO OFICIAL

La entidad requiere que el presente proceso se ejecute bajo el mecanismo de monto agotable para la asignación de la mayor cantidad de espacios en medios de comunicación hasta agotar el presupuesto disponible, conforme al valor por minuto ofertado, por tal razón el valor estimado del contrato corresponde al valor del presupuesto oficial, esto es, hasta por la suma de **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 8.625.046.216,00),** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, para lo cual, la entidad hará las apropiaciones presupuestales correspondientes.

2.7.1 VALOR DE ADJUDICACIÓN

El Consejo Nacional Electoral - CNE adjudicará el presente proceso al proponente que obtenga el mayor puntaje y se llevará a cabo por el valor total del presupuesto oficial asignado al presente proceso de selección bajo el mecanismo de monto agotable.

2.8 FORMA DE PAGO.

El valor del contrato será ejecutado como monto agotable y se pagará de la siguiente manera:

El Consejo Nacional Electoral – CNE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda legal colombiana, de acuerdo con los contenidos efectivamente divulgados a través de los medios de comunicación objeto del contrato, conforme a las tarifas y condiciones establecidas en la oferta económica y el servicio de monitoreo efectivamente prestado.

Se efectuará un solo pago respecto del contenido efectivamente emitido o transmitido en televisión y radio, según corresponda, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de divulgación y demás obligaciones contractuales, y contra el recibo a satisfacción expedido por la supervisión del contrato.

El valor a reconocer corresponderá al costo efectivamente presentado en la oferta económica, soportado con la certificación de emisión más la comisión ofertada liquidada sobre dicho costo y el IVA que corresponda, y el reporte de monitoreo mensual o fracción,

sin exceder el valor unitario ofertado para el respectivo ítem.
No se reconocerán espacios no emitidos, emitidos en condiciones distintas a las aprobadas o sin evidencia del monitoreo.

NOTA 1: Para cada pago se deberá presentar factura debidamente diligenciada y cargada a la plataforma de SIIF Nación, Informe de actividades, certificado suscrito por el supervisor y la acreditación del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El proponente en el valor de su propuesta debe tener en cuenta que la entidad efectúa los descuentos de Ley del orden nacional vigentes y conforme a sus modificaciones de ley, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la entidad, y con la actividad objeto del contrato.

NOTA 2: El informe del contratista, informe de seguimiento de supervisión, acta de inicio y los demás relacionados con la ejecución del contrato reposarán en el expediente contractual.

NOTA 3: Los pagos señalados están sujetos a la meta global de pagos fijada por el PAC de la Dirección Nacional del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El trámite para el pago efectivo de la factura estará sujeto a los procedimientos administrativos internos de la Entidad.

NOTA 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para pago de esta solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por este concepto serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, tener en cuenta que el cargue de la documentación requerida en SECOP II hace parte de la presentación de la documentación.

NOTA 5: Factura electrónica: las partes aceptan y autorizan emplear la facturación como requisito para su aceptación y pago, mediante el mecanismo de la factura electrónica en cumplimiento del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 358 de 2020, la Resolución DIAN 000042 de 2020 y demás normas que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen.

2.9 LUGAR DE EJECUCIÓN O SITIO DE ENTREGA

La ejecución del objeto contratado se desarrollará en todo el territorio nacional y, para efectos contractuales el domicilio será Bogotá D.C.

2.10 OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA

2.10.1 OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir la Constitución Política, las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la contratación estatal y las demás normas relacionadas con la ejecución del objeto contractual.
2. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada, el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y los demás documentos que formen parte integral del contrato.
3. Presentar y mantener actualizadas en la plataforma SECOP II las garantías exigidas para la ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos y de conformidad con las modificaciones que se efectúen durante su ejecución.
4. Suscribir el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para la ejecución contractual.
5. Realizar las labores contratadas de forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción u horarios diversos a aquellos que requieran para el cumplimiento del objeto contractual.
6. Garantizar que el personal destinado a la ejecución contractual cuente con la vinculación correspondiente y se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a la normativa vigente.
7. Atender oportunamente las instrucciones, solicitudes y requerimientos formulados por la supervisión del contrato, relacionados con el cumplimiento del objeto contractual, y adoptar las medidas preventivas o correctivas que correspondan.
8. Informar oportunamente a la supervisión sobre cualquier novedad, anomalía, circunstancia o situación que pueda afectar la ejecución del contrato, presentando las recomendaciones y alternativas de solución que resulten pertinentes.
9. Asistir a las reuniones o mesas de trabajo que sean convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el desarrollo del objeto y alcance contractualmente previsto.
10. Presentar los informes que sean requeridos durante la ejecución del contrato.
11. Reportar cualquier novedad o anomalía, que se presente durante la ejecución del contrato al encargado de la supervisión.
12. Emitir con la debida oportunidad y por escrito las sugerencias, recomendaciones o advertencias que considere, debe conocer el Consejo Nacional Electoral.
13. Presentar con la debida antelación las solicitudes de modificaciones contractuales debidamente sustentadas y con los soportes necesarios para el respectivo análisis por parte de la supervisión del contrato.
14. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor, y adoptar las medidas preventivas y correctivas de manera inmediata.
15. Atender los requerimientos de la supervisión del Contrato, relacionados con el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dando aplicación a los lineamientos establecidos al interior de la entidad con la implementación del programa de Compras Públicas Sostenibles.
16. Publicar en el SECOP II los informes de ejecución del contrato y demás documentos que soportan las facturas radicadas ante la entidad, de conformidad con la

periodicidad establecida, de acuerdo con lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015.

17. Firmar la liquidación del contrato en los tiempos pactados en la minuta contractual.
18. Atender los requerimientos que sobre la ejecución del contrato realicen otras entidades del Estado tales como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, entre otros
19. Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que haga uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por el Consejo Nacional Electoral para conocerla.
20. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Consejo Nacional Electoral, y a las demás autoridades competentes, para que adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
21. No ejercer actos que comprometan o afecten al Consejo Nacional Electoral, por lo que es su obligación como contratista no utilizar, incluso después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información de sus vigilados, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de su misión institucional.
22. Guardar total reserva de la información que obtenga del Consejo Nacional Electoral en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente.
23. Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, pérdida o difusión no autorizada.
24. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.
25. Informar al Consejo Nacional Electoral oportunamente y de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses sobrevinientes, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que surjan posteriores al inicio de la ejecución del contrato frente al contratista o sus representantes legales.
26. Aceptar que el material que sea creado y/o entregado en cumplimiento del contrato, será de propiedad del Consejo Nacional Electoral y debe ir acompañado de sus versiones finales (Ley 23 de 1982). La entidad podrá en un futuro utilizar dichos bienes y productos y de presentarse la necesidad del registro, el certificado de transferencia se deberá entregar en la forma y plazos establecidos en la solicitud realizada por quien ejerce la supervisión del contrato.
27. Cumplir con los procedimientos y formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

28. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias al Consejo Nacional Electoral y a las autoridades competentes
29. Tomar las precauciones necesarias para la bioseguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
30. Cumplir y estar al día con lo establecido en la normatividad vigente frente a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
31. Abstenerse de incurrir en actividades que pongan en riesgo reputacional al Consejo Nacional Electoral, teniéndose que la entidad podrá solicitar el cambio de personal con el que cuenta el contratista si se llega a acaecer dicho riesgo.
32. Registrar en su contabilidad, bien sea por centro de costo o de manera individualizada cada contrato en el que se ejecuten recursos públicos, de forma que permita verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos de cada uno de ellos, lo anterior si está obligado a llevar contabilidad.
33. Presentar la factura electrónica de venta de acuerdo con los requisitos exigidos en la Resolución 000042 de 2020 expedida por la DIAN o aquella que la modifique, adicione o sustituya, cuando aplique; o el que disponga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con los lineamientos establecidos para ello.
34. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

2.10.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual y de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.3 del presente documento, el contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones:

Obligaciones relacionadas con la compra y gestión de espacios en medios de comunicación:

1. Gestionar ante Caracol Televisión, RCN Televisión, Canal Uno, RTVC y las emisoras de Radio Nacional de Colombia la disponibilidad de los espacios de divulgación requeridos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de conformidad con las asignaciones y condiciones determinadas por la Entidad.
2. Adelantar las gestiones comerciales, administrativas y operativas necesarias para la adquisición de los espacios que generen costos con cargo al contrato, conforme a las tarifas, condiciones y valores previamente aprobados por el CNE.
3. Gestionar con los medios de comunicación las órdenes de servicio, reservas y demás actuaciones necesarias para garantizar la disponibilidad de los espacios autorizados, respetando las condiciones de cobertura, fecha, horario, franja y duración establecidas por el CNE.
4. Abstenerse de modificar o sustituir los medios de comunicación, canales, emisoras, fechas, horarios, franjas o demás condiciones previamente autorizadas por el CNE, sin contar con la autorización previa y escrita de la supervisión del contrato.
5. El contratista deberá ejecutar el objeto contractual de manera que contribuya al acceso efectivo, oportuno y en condiciones de igualdad de las organizaciones políticas beneficiarias de los espacios adicionales en medios de comunicación, de conformidad

con el artículo 13 de la Ley 1909 de 2018, la Sentencia SU-347 de 2023 de la Corte Constitucional, las disposiciones que regulen la materia y las instrucciones impartidas por el Consejo Nacional Electoral en el marco de sus competencias.

6. El contratista deberá atender la programación, distribución, contratación, coordinación y emisión de los espacios que le sean solicitados por el Consejo Nacional Electoral, conforme a los criterios de asignación definidos por la entidad y a las condiciones técnicas y económicas establecidas en el contrato, de tal manera que se garantice el acceso efectivo de las organizaciones políticas declaradas en oposición a los medios de comunicación, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1909 de 2018 y las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-347 de 2023.

Obligaciones relacionadas con la programación de la divulgación:

5. Elaborar, presentar y mantener actualizada la parrilla de programación de los espacios de divulgación ordenados o asignados por el CNE, identificando las organizaciones políticas beneficiarias, los medios de comunicación, las fechas, los horarios, las franjas, la duración y el número de emisiones o transmisiones.
6. Coordinar con los medios de comunicación la recepción y entrega oportuna de los materiales audiovisuales o sonoros suministrados por las organizaciones políticas y previamente autorizados por el CNE, conforme a la programación aprobada.
7. Verificar que los materiales suministrados cumplan con los formatos, duración y especificaciones técnicas exigidas por los respectivos medios de comunicación, de acuerdo con los anexos técnicos que forman parte del presente estudio previo.
8. Gestionar los ajustes operativos y las reprogramaciones que resulten necesarios durante la ejecución contractual, informando oportunamente a la supervisión y obteniendo su autorización previa cuando impliquen modificaciones a las condiciones aprobadas.
9. Atender las solicitudes del supervisor, que resulten necesarios durante la ejecución contractual, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado.

Obligaciones relacionadas con el monitoreo y verificación de la divulgación:

10. Realizar el monitoreo técnico de las emisiones y transmisiones ordenadas por el CNE, mediante herramientas tecnológicas y mecanismos de verificación independientes de las certificaciones expedidas por los medios de comunicación.
11. Verificar que cada emisión o transmisión se realice en las condiciones autorizadas por el CNE, incluyendo medio de comunicación, canal o frecuencia, fecha, hora, franja, duración y cobertura correspondiente.
12. Identificar, registrar e informar a la supervisión las emisiones o transmisiones no realizadas, incompletas, interrumpidas, reprogramadas o ejecutadas en condiciones diferentes a las aprobadas, adjuntando las evidencias correspondientes.
13. Gestionar ante los medios de comunicación las aclaraciones, correcciones o reposiciones que correspondan frente a las novedades identificadas, previa instrucción o autorización de la supervisión del contrato.
14. Generar y conservar las grabaciones audiovisuales o sonoras y los reportes de monitoreo que permitan comprobar la efectiva emisión o transmisión de los contenidos autorizados.

Obligaciones relacionadas con la documentación, evidencia y trazabilidad:

15. Conformar y mantener actualizado un expediente digital por cada orden de divulgación, que contenga los documentos y soportes establecidos en las especificaciones técnicas del contrato.
16. Organizar, conservar y entregar al CNE las órdenes de servicio, programaciones aprobadas, certificaciones de los medios, grabaciones, reportes de monitoreo, registros de novedades y demás evidencias que acrediten la gestión y efectiva divulgación de los contenidos.
17. Implementar un mecanismo de trazabilidad que permita identificar y consultar el estado de cada orden de divulgación, desde su recepción hasta su emisión o transmisión, verificación, certificación y facturación.
18. Garantizar que los documentos y evidencias se encuentren disponibles para consulta de la supervisión durante la ejecución contractual, mediante un repositorio digital organizado y con acceso autorizado.

Obligaciones relacionadas con los reportes, informes y control de ejecución:

19. Presentar a la supervisión del contrato informes mensuales de ejecución, así como los informes extraordinarios que sean requeridos, que incluyan como mínimo:

a) Identificación de los medios de comunicación y las organizaciones políticas beneficiarias.

b) Relación de los espacios programados y efectivamente emitidos o transmitidos.

c) Fechas, horarios, franjas y duración programada y efectiva de las emisiones o transmisiones.

d) Tiempo efectivamente utilizado por cada organización política beneficiaria.

e) Certificaciones de emisión o transmisión expedidas por los medios de comunicación, cuando corresponda.

f) Grabaciones audiovisuales o sonoras y demás evidencias técnicas de los espacios divulgados.

g) Reportes independientes de monitoreo y verificación.

h) Relación de novedades, incumplimientos, modificaciones y reprogramaciones, con sus respectivos soportes y actuaciones adelantadas.

i) Identificación de los espacios asignados que no hayan sido utilizados por las organizaciones políticas, acompañada de los soportes que permitan acreditar dicha circunstancia.

j) Relación de los valores comprometidos, ejecutados, facturados y pagados durante el periodo reportado.

19. Implementar y mantener actualizado un tablero de control o herramienta tecnológica que permita al CNE consultar el estado de ejecución del contrato, incluyendo las órdenes recibidas, emisiones programadas y realizadas, minutos divulgados, novedades, valores comprometidos, ejecutados y saldo disponible.
20. Llevar un control detallado de la ejecución presupuestal del contrato, que permita identificar los valores autorizados, comprometidos, facturados, pagados y pendientes de pago, así como el saldo disponible, garantizando su consulta por parte de la supervisión.

Obligaciones relacionadas con las herramientas tecnológicas:

21. Acreditar, al momento de la suscripción del acta de inicio, que dispone de las licencias, suscripciones o derechos de uso vigentes de las herramientas tecnológicas necesarias para el monitoreo, verificación y documentación de las emisiones, y garantizar su disponibilidad durante la ejecución del contrato. Si el monitoreo es realizado directamente por el contratista, se acreditará mediante certificación de su representante legal. Si lo realiza un proveedor externo, se aportará el documento que acredite el vínculo jurídico vigente con este, sin perjuicio de la responsabilidad integral del contratista frente al CNE.
22. Garantizar que las herramientas tecnológicas utilizadas permitan consultar los registros históricos de las emisiones o transmisiones, sus evidencias y los reportes de ejecución, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el CNE.

Obligaciones relacionadas con el seguimiento y coordinación contractual:

24. Coordinar y participar en las reuniones técnicas y operativas que convoque la supervisión del contrato, con el fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones, atender novedades y efectuar seguimiento a los compromisos establecidos.
25. Brindar el apoyo técnico y operativo requerido para implementar las asignaciones de espacios determinadas por el CNE, mediante la elaboración de cronogramas, matrices de programación, registros de disponibilidad y demás documentos necesarios para la ejecución del servicio, sin asumir funciones decisorias propias de la autoridad electoral.

2.11 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones aplicables, el Consejo Nacional Electoral se obliga a:

1. Expedir el registro presupuestal correspondiente, conforme a los requisitos y procedimientos aplicables.
2. Aprobar las garantías exigidas para la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas.

3. Suscribir el acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos legales y contractuales correspondientes.
4. Verificar que los bienes y/o el servicio prestado por el contratista se ajustan a las especificaciones señaladas en la propuesta y el contrato.
5. Ejercer la supervisión del contrato y verificar que los servicios prestados por el contratista cumplan con las condiciones establecidas en la oferta, el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y los demás documentos contractuales.
6. Efectuar los pagos a que haya lugar, conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones y de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
7. Suministrar oportunamente al contratista los documentos, actos administrativos, instrucciones e información necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual.
8. Brindar la colaboración institucional necesaria para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro del ámbito de sus competencias.
9. Solicitar, recibir y evaluar los informes, documentos, soportes técnicos y demás información presentada por el contratista, con el fin de verificar la ejecución de los servicios contratados.
10. Adelantar las actuaciones administrativas que correspondan frente a los presuntos incumplimientos contractuales, de conformidad con las disposiciones legales y contractuales aplicables.
11. Iniciar los procesos administrativos sancionatorios cuando se requiera.
12. Convocar, cuando corresponda, a la Comisión de Monitoreo del Estatuto de la Oposición del CNE para ejercer las funciones de seguimiento y control institucional relacionadas con los espacios asignados a las organizaciones políticas declaradas en oposición.
13. Realizar el monitoreo y revisión del espacio asignado a la agrupación política a través de la “Comisión de monitoreo de estatuto de la oposición del CNE", dejando constancia del uso y disfrute efectivo del espacio.
14. Realizar, a través de las instancias institucionales competentes, el seguimiento y la verificación del uso de los espacios asignados a las organizaciones políticas declaradas en oposición, con fundamento en los informes, certificaciones y demás evidencias disponibles, sin perjuicio del monitoreo técnico que corresponde efectuar al contratista.
15. Suministrar al contratista los actos administrativos y las decisiones mediante los cuales se reglamenten o determinen las condiciones de asignación de espacios de divulgación en medios de comunicación, para su aplicación durante la ejecución contractual.
16. Adelantar, cuando corresponda y exista fundamento normativo, las actuaciones administrativas relacionadas con las consecuencias derivadas de la no utilización de los espacios asignados a las organizaciones políticas declaradas en oposición, de conformidad con las competencias y procedimientos legalmente establecidos.
17. Velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas establecidas en el contrato, de tal manera que se garantice el acceso efectivo de las organizaciones políticas declaradas en oposición a los medios de comunicación, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1909 de 2018 y las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-347 de 2023.
18. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del contrato y las previstas en la ley.

2.12 SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato será ejercida por la **Jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y Jefe de oficina de Inspección del Consejo Nacional Electoral,** o quien el ordenador del gasto designe. La supervisión realizará el seguimiento de la ejecución del contrato teniendo en cuenta lo reglado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente aplicable.

Cuando la supervisión se ejerza de manera conjunta, el acto de designación precisará las obligaciones y aspectos que verificará cada supervisor y quién expide el recibo a satisfacción que soporta cada pago.

Así mismo, el supervisor del contrato podrá designar a funcionarios tanto de perfil técnico, contable y jurídico que considere necesarios e idóneos, quienes realizarán el apoyo a la supervisión en el seguimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales, así como en la revisión de informes y sus respectivos soportes para los pagos contractuales.

Los supervisores ejercerán las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, el Manual de Supervisión e interventoría o el acto administrativo que lo modifique.

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Efectuado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de **LICITACIÓN PÚBLICA** reglamentada por la Ley 1150 de 2007 en su numeral 1 del artículo 2.

3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección del contratista se desarrollará con observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, igualdad, publicidad y libre concurrencia consagrados en la Constitución Política y en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, garantizando que todos los interesados participen en condiciones de igualdad y bajo las mismas reglas previamente definidas por la Entidad.

Los estudios y documentos previos constituyen un elemento esencial del proceso contractual, en la medida en que contienen la justificación de la necesidad, las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y económicas que sustentan la contratación, así como las reglas que orientan la participación de los interesados y la ejecución del contrato que llegare a celebrarse.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, su alcance, las obligaciones a desarrollar y la cuantía estimada del proceso, la selección del contratista se adelantará mediante la modalidad de **Licitación Pública**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los artículos

2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, la Ley 2069 de 2020 y las demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

La escogencia de esta modalidad obedece a que constituye la regla general para la selección de contratistas por parte de las entidades estatales cuando el objeto a contratar no se enmarca en alguna de las causales que permitan acudir a una modalidad diferente de selección, conforme a lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

El presente proceso de selección y el contrato que se derive del mismo se regirán por las disposiciones de la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018, la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la contratación estatal, así como por los documentos que conforman el proceso de selección, incluidos los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás actuaciones que se expidan durante su desarrollo.

De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos estatales les serán aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas expresamente por la normativa especial de contratación pública.

3.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:

El presente proceso de contratación se regirá por los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, igualdad y publicidad consagrados en la Constitución Política de Colombia, así como por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018, la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulan la contratación estatal y resulten aplicables al presente proceso.

Para atender la necesidad descrita, el Consejo Nacional Electoral adelantará la selección del contratista mediante la modalidad de **Licitación Pública**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse de la regla general para la escogencia de contratistas por parte de las entidades estatales.

La elección de esta modalidad obedece a la naturaleza, alcance y complejidad del objeto contractual, el cual comprende la prestación integral de los servicios de negociación, programación, monitoreo, verificación y documentación de los espacios en medios de comunicación social del Estado y en medios que hacen uso del espectro electromagnético, en favor de las organizaciones políticas declaradas en oposición en el nivel nacional, en cumplimiento de la Ley 1909 de 2018 y de su reglamentación.

Adicionalmente, la cuantía estimada del proceso supera los montos previstos por la normativa vigente para acudir a modalidades de selección diferentes, tales como la mínima cuantía o la selección abreviada, razón por la cual resulta procedente adelantar el presente

proceso mediante licitación pública, garantizando la participación plural de oferentes y la selección objetiva de la propuesta más favorable para la Entidad.

El procedimiento y la modalidad de selección se soportan en los siguientes fundamentos jurídicos:

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 209, establece que *"la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad*", y en el artículo 334 señala que el Estado intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como en el aprovechamiento de los recursos naturales, con el propósito de racionalizar la economía.

La Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en su artículo 2º define los principios de la contratación estatal, en el artículo 24 establece el deber de selección objetiva, indicando que la escogencia debe hacerse *"con base en la oferta más favorable para la entidad"* y en el artículo 30 establece las reglas a las que se sujeta el procedimiento de licitación pública.

La Ley 1150 de 2007, en su artículo 2º, regula las modalidades de selección y determina que *"la licitación pública será la modalidad general*" para los procesos de contratación adelantados por las entidades estatales, salvo las excepciones expresamente previstas.

El Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en su artículo 2.2.1.1.1.1 señala las reglas generales aplicables a las modalidades de selección y en el artículo 2.2.1.2.1.1 desarrolla el procedimiento específico que debe seguirse en los procesos de licitación pública.

La Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, en su artículo 83 establece que, con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor.

Con base en los anteriores fundamentos jurídicos, se justifica la utilización de la modalidad de contratación de licitación pública para este proceso, en plena observancia de los principios constitucionales y legales que rigen la contratación pública en Colombia.

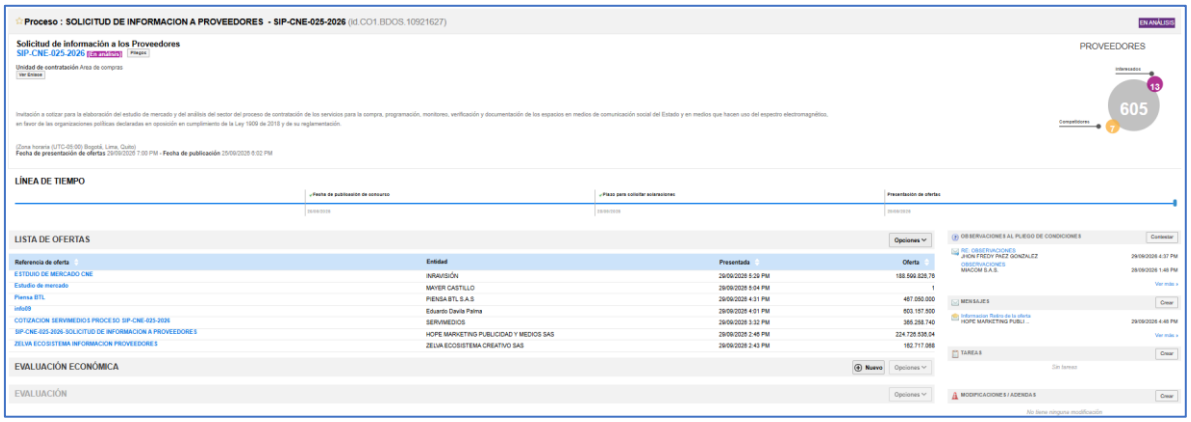
4 ESTUDIO DEL MERCADO, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

4.1 JUSTIFICACIÓN QUE SOPORTA ESTUDIO DE MERCADO:

El Consejo Nacional Electoral, a través de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, el 25 de septiembre de 2026, realizó la solicitud de cotizaciones mediante la plataforma SECOP II, con número de proceso de evento de cotización SIP-CNE-025-2026, en cumplimiento de la normativa vigente y de los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. Lo

anterior, con el fin de estructurar de manera adecuada la estimación del presupuesto oficial correspondiente a la contratación de Central de Medios para otorgar espacios adicionales en medios de comunicación social a organizaciones políticas que ejercen su derecho fundamental a la oposición.

Del proceso se recibieron en total 6 cotizaciones, a través de la plataforma SECOP II, las cuales se recibieron hasta el 29 de septiembre conforme a la fecha y hora establecida en la invitación a cotizar:



Es importante precisar que las cotizaciones presentadas por las empresas MAYER CASTILLO y EDUARDO DÁVILA no fueron tenidas en cuenta en el estudio de mercado y del sector.

Luego de verificadas las cotizaciones y la apropiación presupuestal se determinó escoger la métrica más conveniente para las partes teniendo en cuenta factor precio, calidad y pluralidad al proceso de selección cumpliendo el principio de economía; esto asegurando que el valor de los bienes se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio más favorable y así mismo siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de selección. Se realizaron las siguientes proyecciones:

MEDIOS								
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**COMISIÓN (9%)**	**IVA**	**VR. UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VR. UNITARIO INCLUIDO IVA**
TELEVISIÓN								
1	CARACOL TELEVISIÓN S.A.	MINUTO	30	$ 134.691.430,00	$ 12.122.229,00	$ 2.303.224,00	$ 149.116.883,00	$ 4.473.506.490,00
2	RCN TELEVISIÓN S.A.	MINUTO	30	$ 71.424.429,00	$ 6.428.199,00	$ 1.221.358,00	$ 79.073.986,00	$ 2.372.219.580,00
3	CANAL UNO	MINUTO	30	$ 35.380.000,00	$ 3.184.200,00	$ 604.998,00	$ 39.169.198,00	$ 1.175.075.940,00
4	RTVC	MINUTO	30	$ 10.286.592,00	$ 925.793,00	$ 175.901,00	$ 11.388.286,00	$ 341.648.580,00
TOTAL, TELEVISIÓN								**$ 8.362.450.590,00**
RADIO								
1	RADIO NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC	MINUTO	30	$ 6.983.220,00	$ 628.490,00	$ 119.413,00	$ 7.731.123,00	$ 231.933.690,00
TOTAL, RADIO								**$ 231.933.690,00**
MONITOREO								
1	SERVICIO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVA DIVULGACIÓN DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES AL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN EN TELEVISIÓN Y RADIO DE COBERTURA NACIONAL, QUE PERMITA ACREDITAR LAS EMISIONES Y TRANSMISIONES REALIZADAS, IDENTIFICANDO MEDIO, FECHA, HORARIO, DURACIÓN Y DEMÁS CONDICIONES DE DIVULGACIÓN, CON SUS RESPECTIVOS	MES	1	$ 25.766.333,00		$ 4.895.603,00		$ 30.661.936,00

	SOPORTES Y EVIDENCIAS AUDIOVISUALES O SONORAS.							
TOTAL, MONITOREO								**$ 30.661.936,00**
TOTAL								**$ 8.625.046.216,00**

El análisis de precios de los servicios se considerará como fijos y firmes, por ende, serán de carácter obligatorio para las partes en la cuantificación del contrato y, en consecuencia, será de carácter obligatorio durante la totalidad del período de ejecución del contrato a celebrarse y por ningún motivo o circunstancia se podrá cambiar este condicionamiento contractual.

NOTA 1: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los ítems que incluye el IVA (EN CASO DE APLICAR), de no ser así, se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por haber sobrepasado los valores de referencia establecidos por la entidad.

NOTA 2: El Consejo Nacional Electoral, en aras de garantizar la aplicación al principio de igualdad y de selección objetiva, y dando aplicación a los lineamientos dados por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, adelantará la evaluación de las propuestas económicas sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto es, con la inclusión de los impuestos, que se entienden parte del precio. Así, si un oferente ES RESPONSABLE DE IVA y ello influye en el precio ofertado, la evaluación se debe hacer sobre el precio final, sin importar si en el proceso existen otros oferentes NO RESPONSABLES DE IVA (ANTES RÉGIMEN SIMPLIFICADO); lo anterior de conformidad con el concepto 4201912000006059 y al Radicado N°: 2202013000002353 de Colombia Compra Eficiente.

4.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La entidad requiere que el presente proceso se ejecute bajo el mecanismo de monto agotable para la asignación de la mayor cantidad de espacios en medios de comunicación hasta agotar el presupuesto disponible, conforme al valor por minuto ofertado.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo Nacional Electoral establece el presupuesto oficial con cargo a los recursos apropiados en su sección presupuestal, por la suma de **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 8.625.046.216,00)** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, para lo cual, la entidad hará las apropiaciones presupuestales correspondientes**.**

No obstante, el proceso se evaluará a través de la oferta económica, con base en la cual se estima financiar, como mínimo, treinta (30) minutos por medio durante el plazo de ejecución; siendo pertinente indicar que la cantidad de minutos puede aumentar de acuerdo con el presupuesto.

4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Consejo Nacional Electoral cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 8126 del 23-10-2026.

REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015)

4.4 REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la **capacidad jurídica**, las **condiciones de experiencia**, la **capacidad financiera** y de **organización** de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, pero habilitan a los proponentes para participar en el proceso de selección. Los requisitos habilitantes se establecen de forma adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor; buscan verificar que el futuro contratista cuente con la capacidad jurídica, financiera, organizacional y técnica suficiente para ejecutar el objeto contractual.

Los requisitos habilitantes se verificarán con base en la información contenida en el certificado del RUP, para lo cual deberá aportar el certificado de inscripción y clasificación expedido por la Cámara de Comercio, **VIGENTE** y en **FIRME.**

Se entenderán taxativamente como requisitos habilitantes los señalados por el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Los proponentes deben acreditar los siguientes requisitos habilitantes: capacidad jurídica, capacidad financiera y organizacional, propuesta técnica y la experiencia. Estos requisitos serán verificables por los integrantes del comité evaluador, analizando si los proponentes CUMPLEN O NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones mínimas exigidos por la entidad en el pliego de condiciones; si los proponentes no cumplen estos requisitos, el ofrecimiento será rechazado.

De conformidad con la normativa aplicable, el CNE realizará la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, Consorcios, Uniones Temporales o promesas de sociedad futura) con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), y los demás documentos que se exijan como formatos para este proceso. Para el caso de los extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, los requisitos habilitantes se verificarán directamente por el CNE, de acuerdo con lo aquí establecido.

GENERALIDADES:

- Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el pliego de condiciones.
- Todos los proponentes deben diligenciar el Formato - Experiencia y los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el Formato – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.

- Los proponentes obligados a estar inscritos en el RUP deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre, se tendrá como referencia para establecer el de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

REQUISITO HABILITANTE	CUMPLIMIENTO
Jurídico	Habilitado/No habilitado
Técnicos	Habilitado/No habilitado
Financieros y Organizacional	Habilitado/No habilitado

4.4.1 CAPACIDAD JURÍDICA:

En el presente proceso de contratación, podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto social sea igual o similar al objeto a contratar, asociados en consorcios o uniones temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y adicionalmente que acrediten los requisitos habilitantes solicitados y demuestre su capacidad jurídica así:

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta.
- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 de 2011 y artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.
- No estar reportado en el último boletín de responsables fiscales vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 o quienes se encuentren inhabilitados por incumplimiento reiterado en los términos del artículo 90 de la ley 1474 de 2011.
- No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. La anterior afirmación, se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados.

5.5.1.1 APODERADOS:

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o por intermedio de APODERADO, para el segundo caso deberán anexar junto con la oferta el poder otorgado en forma legal, donde se indique de manera expresa, facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes del presente proceso.

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero se constituye en requisito indispensable tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al proponente y a todos los

integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades:

- Formular oferta para el presente proceso de selección.
- Responder a los requerimientos y aclaraciones que solicite el CNE en el presente proceso.
- Verificar las notificaciones dentro del proceso.
- Suscribir si es procedente el nombre y representación del Adjudicatario del contrato.

NOTA: Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74).

5.1.1.2 APODERADO DE PERSONAS EXTRANJERAS:

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado colombiano domiciliado en nuestro país, quien deberá estar facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, además de suscribir los documentos y demás actos necesarios de acuerdo con la ley.

NOTA: Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir un solo apoderado común y, por lo tanto, se solicita la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia.

El CNE no requerirá de manera obligatoria la autenticación del poder especial.

A efectos de verificar la capacidad jurídica del proponente, el Consejo Nacional Electoral requiere que con la propuesta se adjunte los siguientes documentos:

5.1.1.3 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ESTABLECER ANEXO):

Se publicará el documento como anexo y deberá estar firmada por el o los Representantes Legales o Apoderados del PROPONENTE (si éste es una persona jurídica), o la persona designada (si EL PROPONENTE es un consorcio o una unión temporal), o quien debidamente autorizado y acreditado haga sus veces siguiendo el modelo que para tal efecto se suministra en el **"ANEXO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA".**

La carta de presentación de la propuesta debe ir acompañada de copia legible de los siguientes documentos:

1. Cédula de ciudadanía del proponente o de su representante legal o suplente si es persona jurídica, consorcio o unión temporal; en caso de consorcios y uniones temporales igualmente deberá allegarse copia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales o de los representantes legales de las personas jurídicas que los conforman.

2. Copia del RUT. En caso de consorcio o unión temporal, se anexará el RUT de cada uno de sus integrantes.

3. Si el oferente corresponde a una persona natural, o está conformado por personas naturales (en ambos casos varón menor de 50 años) deberá acreditar que tenga resuelta su situación militar. No obstante, la entidad podrá consultar en la página web.

   https://www.libretamilitar.mil.co/modules/consult/militarysituation.

Con la suscripción de esta carta de presentación, el oferente manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en las inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses establecidos en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas pertinentes.

En la carta de presentación el oferente deberá indicar de la información suministrada en su oferta, cual es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter.

NOTA 1: En el evento de estar suscrita por un apoderado, el proponente debe anexar el poder donde se especifique que se otorga poder para presentar la propuesta y/o participar en todo el proceso de selección y/o suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. El poder deberá ser anexado junto con la carta de presentación de la propuesta.

NOTA 2: Con la presentación y firma de este documento se entiende que el proponente ha leído, entendido y que puede garantizar el cumplimiento total de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego y sus anexos, y en caso de resultar adjudicatario se compromete a cumplirlo en su totalidad

5.1.1.4 FOTOCOPIA CÉDULA CIUDADANÍA:

El proponente deberá cargar en la plataforma del SECOP II copia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal.

En caso de estar debidamente representados por apoderado, éste deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía, copia legible de la tarjeta profesional (cuando el apoderado sea abogado), poder debidamente otorgado, así como los respectivos antecedentes disciplinarios y fiscales.

En caso de tratarse de propuestas conjuntas se deberá allegar la fotocopia de la cédula de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

5.1.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

A. PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS:

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deben acreditar que su duración no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Los oferentes nacionales probarán su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de la circunscripción territorial que corresponda o de la Entidad competente según el caso. Los oferentes extranjeros con la certificación expedida por la Entidad competente en el respectivo país.

Las Sociedades Extranjeras de carácter privado deben acreditar en el país con el lleno de las formalidades pertinentes, un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, y para los efectos relacionados con el contrato, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Las Sociedades Extranjeras que estén desarrollando actividades permanentes en el país, deben acreditar la existencia y representación legal de la sucursal, que para tal efecto ha debido constituir con el lleno de las formalidades exigidas en el Código de Comercio Colombiano.

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, debe adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto oficial.

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, si tienen la anterior restricción, debe contar con dicha autorización, hasta por el valor del presupuesto oficial.

La certificación sobre existencia y representación legal debe haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, en este certificado debe constar que el término de duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de ejecución y un (1) año más

Para la verificación del cumplimiento de este requisito, se dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, la Circular Única del 16 de abril de 2019 y el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla (Ley 455 del 4 de agosto de 1998, y en las circulares AC/LG/641/2001 y AC/LG14576 de 2001, expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.)

NOTA 2: Cuando se trate de personas naturales se aportará el certificado de matrícula mercantil vigente y cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso, en el que se encuentre inscrita la actividad económica que sea igual o similar al objeto a contratar.

NOTA 3: En el evento de presentarse propuesta a través de apoderado, se deberá acreditar dicha calidad con el lleno de los requisitos que para el efecto establezca la Ley. En caso de presentarse como Consorcio o Unión temporal y uno de sus integrantes sea persona natural deberá encontrarse inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, en el que se encuentre inscrita la actividad principal que sea igual o similar al objeto a contratar.

NOTA 4: Se debe acreditar que el objeto social de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

NOTA 5: Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal. Para el caso de otras formas asociativas, podrán presentar el documento equivalente al de existencia y representación legal, que contenga los elementos necesarios para la verificación de la información requerida.

Si de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, se certifica que las facultades del representante legal están limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del proceso de selección para contratar, el proponente deberá presentar el acta respectiva en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado.

NOTA 6: Las actividades de las personas Naturales o el objeto de las personas jurídicas nacionales o extranjeras, con o sin sucursal en Colombia, de cada uno de sus miembros si se trata de un consorcio, o de una unión temporal, debe permitir presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el objeto del Contrato, por lo tanto, se verificará el desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, de conformidad al Certificado de Existencia y Representación Legal.

5.1.1.6 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES:

El proponente deberá adjuntar con su oferta el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde se encuentre inscrito y este deberá haber sido expedido máximo treinta (30) días antes de la fecha de cierre de la licitación pública, con fundamento en lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y en la subsección 5 referida al Registro Único de Proponentes – RUP del Decreto 1082 de 2015 el mismo debe encontrarse vigente y en firme, con la información relacionada con corte a 31 de diciembre de 2025.

Cuando el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá anexar el documento aquí descrito en el que se acredite que la experiencia de contratos celebrados aportada por cada uno de sus miembros se encuentra inscrita conforme la clasificación dada por la Entidad.

Los proponentes nacionales o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción al RUP, vigente y en firme.

En el caso de proponentes plurales, cada uno de los miembros de la estructura plural deberá cumplir este requisito.

Los proponentes deben tener en cuenta, lo siguiente:

A. **RESPECTO DE LA FIRMEZA:** La firmeza del acto de inscripción, renovación y actualización del RUP debe guardar plena correspondencia con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. La persona natural o jurídica podrá presentarse a los procedimientos de selección cuando el acto administrativo que realiza la inscripción del RUP se encuentra en firme, toda vez, que las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiran celebrar contratos con las Entidades estatales, deben estar inscritas en él, salvo las excepciones establecidas en la ley. En caso contrario, se tiene que no cumple con los requisitos exigidos por la norma para contratar y, en consecuencia, su oferta será rechazada.

B. **DE LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES:** El Consejo Nacional Electoral verificará que el proponente no se encuentre en causal de inhabilidad de las que trata la Ley 1474 de 2011 en lo que refiere al incumplimiento reiterado.

NOTA 1: Si el certificado del RUP no consigna la información de multas y/o sanciones, el proponente deberá certificar aquellas multas o declaratorias de incumplimiento en firme. La Entidad dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 2195 del 2022.

5.1.1.7 CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:

Se admitirá la participación de consorcios y uniones temporales, cuyos integrantes deben cumplir las condiciones señaladas en la ley y en el presente estudio previo, condición que deben indicar en su oferta. Para tal efecto, aportarán el documento mediante el cual conforman el consorcio o la unión temporal.

Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

Los miembros del consorcio o unión temporal deben señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos. De igual manera deben indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

Los integrantes de un consorcio o unión temporal responderán por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, y, las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, se impondrán de acuerdo con lo previsto en la mencionada norma.

Los integrantes deben acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el consorcio o la unión temporal deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso, so pena de causal de rechazo.

Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal; en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Consejo Nacional Electoral.

Las personas o firmas que integran el Consorcio o Unión Temporal deben acompañar los documentos requeridos en el presente pliego de condiciones definitivo, como si fueran o participaran en forma independiente, salvo en los casos expresamente previstos en el presente pliego de condiciones definitivo. A su vez, designarán el representante en el documento de conformación del consorcio o unión temporal, el cual debe estar firmado por cada uno de los integrantes con la firma autorizada de cada una de las partes.

La propuesta debe ser presentada y firmada por el representante designado para tal efecto. El consorcio o unión temporal debe tener una duración igual a la del término del contrato y un (1) año más.

NOTA 1: Se debe presentar la designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

NOTA 2: Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.

NOTA 3: Si se trata de **ENTIDADES JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO**, deberá estar inscrito en el registro mercantil y su objeto debe estar relacionado en el objeto de la presente convocatoria; además de cumplir los mismos requerimientos realizados a las personas jurídicas, y tenga por lo menos seis (6) meses de constituida al momento de la fecha de cierre de la convocatoria.

NOTA 4: En el caso de consorcios o uniones temporales las certificaciones técnicas habilitantes deberán ser acreditadas por al menos uno de los integrantes de la figura asociativa, con la finalidad de dar cumplimiento de manera mancomunada al requisito establecido.

5.1.1.8 PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO:

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, adicionalmente, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia deberá presentar la certificación del Registro Único de proponentes, de conformidad con el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por el artículo 221 del Decreto 0019 de 2012.

2. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, y/o que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

3. Acreditar su existencia y representación legal, por lo tanto, deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la propuesta, en el mencionado documento, deberá constar la existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades.

NOTA 1: Se deberá señalar que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la persona jurídica a través de su propuesta.

5.1.1.9 PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA:

Las personas que participen bajo la modalidad de promesa de sociedad futura deben presentar al CNE uno de los originales de una promesa escrita de contrato con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, en el cual, debe consignarse lo siguiente:

- La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una sociedad colombiana dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

- La sociedad debe ser constituida con el único objeto de celebrar y ejecutar el contrato

- Que su objeto social coincida con el objeto del presente proceso de contratación

- La responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez se constituya se debe regir por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Por lo menos se debe comprometer a la manifestación

expresa de cada uno de los promitentes quienes responderán solidariamente con los demás promitentes y con la sociedad por los perjuicios sufridos al CNE derivados de un posible incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los términos establecidos.

- La duración del mismo no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución del contrato y un (01) año más.

- La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto del mismo.

- La declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades.

NOTA 1: Los integrantes asociados bajo la modalidad de promesa de sociedad futura deben suscribir escritura pública de constitución de la sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante el registro mercantil, en los mismos términos pactados en la promesa, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación.

NOTA 2: Si se venció el plazo sin que se hubiera otorgado y registrado la escritura pública, se considera que no existe interés para suscribir el contrato y se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

5.1.1.10 SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que para los efectos del artículo 8, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, además de los documentos señalados en el numeral anterior, deberá aportar una certificación según lo establece el artículo 2.2.1.1.2.2.8. del Decreto 1082 de 2015.

5.1.1.11 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

El proponente deberá cargar en la plataforma del SECOP II junto con su propuesta, una garantía de seriedad de la oferta a favor del Consejo Nacional Electoral, con NIT 901717412-8, mediante una póliza de seguros expedida por una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

Dicha garantía debe ser constituida por el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial de este proceso contractual y con una vigencia de tres (3) meses contados desde la fecha establecida para el cierre de proceso. Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso de licitación pública, los proponentes deben ampliar la vigencia de la póliza a solicitud del Consejo Nacional Electoral.

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando sus integrantes) y no a nombre del Representante de este (artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015), así como su porcentaje de participación.

En caso de no ser posible la expedición de la garantía por una compañía de seguros, legalmente establecida, se aceptará cualquiera de las garantías especificadas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 Clases de garantías del Decreto 1082 de 2015.

5.1.1.12 CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

El oferente debe acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- **PARA PERSONAS NATURALES:**

Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4° Ley 797 de 2003, el Decreto Ley 2150 de 1995 y Decreto 1273 de 2018; esto es, la planilla de pago a los aportes para la seguridad social en salud y pensiones únicamente como cotizante independiente, adicionalmente si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales de ellos, en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

- **PARA PERSONAS JURÍDICAS:**

En el caso de personas jurídicas este requisito se deberá acreditar en los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando aplique, o a través del representante legal. En todo caso las certificaciones dejarán constancia de los aportes efectuados a los sistemas mencionados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de sus miembros debe acreditar el pago de los aportes.

Nota: Utilizar anexo denominado **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002** aportado por la entidad.

5.1.1.13 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el anexo que se establezca para tal fin en el pliego de condiciones, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.

Si eventualmente se llega a comprobar el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá suscribir el documento.

5.1.1.14 CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

El proponente deberá aportar con la propuesta el certificado de antecedentes disciplinarios vigente. Si se trata de una persona jurídica deberá aportar los antecedentes del representante legal de la empresa proponente, y el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 9 del Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008, consultará la página de la Procuraduría General de la Nación para verificar que el proponente no tenga antecedentes.

Para las personas jurídicas se verificará que ni los representantes legales ni la empresa se encuentren reportados, de ser así, la Entidad se abstendrá de celebrar cualquier tipo de contrato con él.

En el caso que el proponente sea un consorcio o unión temporal, se le realizará la revisión especificada en el inciso anterior a cada uno de los integrantes que los conforman.

5.1.1.15 CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:

El proponente deberá aportar con la propuesta el certificado de antecedentes fiscales vigente. Si se trata de una persona jurídica deberá aportar los antecedentes del representante legal de la empresa proponente, y el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 9 del Decreto N°19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública" y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008, consultará la página de la Contraloría General de la República para verificar que el proponente no tenga antecedentes.

Para las personas jurídicas se verificará que ni los representantes legales ni la empresa se encuentren reportados, de ser así, la Entidad se abstendrá de celebrar cualquier tipo de contrato con él.

En el caso que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, se le realizará la revisión especificada en el inciso anterior a cada uno de los integrantes que los conforman

5.1.1.16 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES:

El proponente deberá aportar con la propuesta el certificado de antecedentes judiciales vigente. Si se trata de una persona jurídica deberá aportar los antecedentes del representante legal del proponente, y el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 9 del Decreto N°19 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública" y la Circular No. 005 de fecha 25 de febrero de 2008, consultará la página de la Policía Nacional para verificar que el proponente no tenga antecedentes judiciales.

Para las personas jurídicas se verificará que los representantes legales no reporten antecedentes judiciales, de ser así, la Entidad se abstendrá de celebrar cualquier tipo de contrato con él.

En el caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal se realizará la consulta al representante legal y a cada uno de los integrantes que lo conforman.

5.1.1.17 VERIFICACIÓN EN EL "SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS –RNMC":

El proponente deberá aportar con la propuesta la constancia de no encontrarse con multas vigentes, de conformidad con el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" consultará la página de la Policía Nacional para verificar que el proponente se encuentre al día en el pago de las multas establecidas en el Código.

En el caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. Nota General: El proponente deberá aportar la Fotocopia de su Cédula de Ciudadanía en caso de ser persona jurídica la del Representante Legal, las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente.

5.1.1.18 REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 la ley 2097 de 2021, "El deudor alimentario moroso sólo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado".

5.1.1.19 DECLARACIÓN JURAMENTADA DE MULTAS Y/O SANCIONES:

Se publicará el documento como **ANEXO,** y deberá ser suscrita por el representante legal de la persona jurídica, o apoderado (representante legal) del proponente de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas.

5.1.1.20 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO:

Se deberá aportar RUT de la persona natural o jurídica o de aquellas empresas que se encuentren constituidas como unión temporal y pretendan participar en el presente proceso.

5.1.1.21 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con Entidades públicas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes en general, y en especial no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República de acuerdo con lo previsto en Ley 1952 de 2019 en concordancia con el Art. 60 de la Ley 610 de 2000. El proponente declarará, bajo la gravedad del juramento, en la Carta de Presentación de la propuesta, que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés.

Se publicará el documento como **ANEXO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**, y deberá ser suscrita por el representante legal de la persona jurídica, o apoderado (representante legal) del proponente de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas.

5.1.1.22 ANTECEDENTES INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES:

El proponente deberá adjuntar con su propuesta la certificación vigente que acredite que no se encuentra incurso en inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley 1918 de 2018.

5.2 CAPACIDAD TÉCNICA:

5.2.1 CUMPLIMIENTO CONDICIONES TÉCNICAS

Corresponde a los requerimientos técnicos mínimos exigidos por el CNE, establecidos en el presente estudio previo, los cuales son de obligatorio cumplimiento. El resultado de la verificación o evaluación técnica de las propuestas no da lugar a asignación de puntaje, sólo acredita si la propuesta CUMPLE/ NO CUMPLE" técnicamente para ser habilitada. El proponente deberá manifestar en su oferta que conoce y acepta las especificaciones técnicas establecidas para el proceso.

Se recuerda que los documentos técnicos, deben ser presentados, sin tachaduras, ni enmendaduras, completamente diligenciados, con las especificaciones técnicas propuestas y firmados por el oferente o su representante legal, según el caso.

Si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta, anexar información adicional a la solicitada por el CNE, podrá allegarla haciendo referencia al formulario que complementa.

El oferente deberá adjuntar propuesta de acuerdo con el ANEXO No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" documento debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces, acreditando que cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas y el compromiso de cumplir en la ejecución del contrato.

5.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, en concordancia con lo señalado en el *"Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación",* emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto contractual, la cual es verificada por la Entidad contratante con base en la información que se encuentre certificada en el Registro Único de Proponentes (RUP), para lo cual el proponente deberá aportar el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio vigente y en firme.

El proponente deberá acreditar experiencia específica en la prestación de servicios como central de medios, agencia, gestión integral de pauta publicitaria, o estrategias de comunicación institucional, intermediación, negociación, contratación, administración, programación, monitoreo, verificación o certificación de espacios en medios de comunicación masivos, especialmente radio y televisión.

Requisito mínimo:

REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

- Acreditar máximo **TRES (03)** contratos ejecutados, cuyo objeto haya sido la prestación de servicios como central de medios, agencia, gestión integral de pauta publicitaria, o estrategias de comunicación institucional.

Para verificar el cumplimiento de la experiencia señalada, el proponente deberá diligenciar el **FORMATO RELACIÓN DE CONTRATOS**, indicando con cuales, de los contratos reportados en el RUP, considera que acredita su experiencia. Esta verificación se realizará

respecto de los contratos que se indiquen en el mencionado formato, verificando su clasificación en el RUP del Proponente hasta el tercer nivel.

El proponente persona natural, jurídica, individual o plural deberá acreditar la experiencia con el certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios en tercer nivel expresado, por lo que, la certificación correspondiente a cada contrato aportado deberá evidenciar la experiencia acreditada en el RUP y cuyo objeto se relacione con el objeto de la presente contratación e inscrito en al menos uno (01) de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios **que se verificarán hasta el tercer nivel:**

Segmento	Familia	Clase	Producto
82000000	82100000	82101600	82101601
82000000	82100000	82101600	82101602
82000000	82100000	82101800	82101801
82000000	82100000	82101900	82101901
82000000	82100000	82101900	82101902
83000000	83110000	83121700	83121701
83000000	83110000	83121700	83121702

Los contratos deben haberse ejecutado en su totalidad, antes del cierre del proceso de selección y, la sumatoria del valor de los contratos acreditados deberá ser igual o superior al cien por ciento 100% del presupuesto oficial, estimado para la presente contratación expresado en (SMMLV), es decir, que equivale a 4.926 SMMLV.

La determinación del valor a acreditar se soporta en que la ejecución contractual se hará mensualizada y la causación de los pagos correspondientes a los servicios efectivamente prestados corresponderán al mismo periodo, por lo que, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y beneficiar la competencia dentro del proceso de selección objetiva, la fijación de experiencia equivalente a ejecución de presupuestos iguales al 100% del valor del contrato es proporcional y coherente con este hecho, pues el apalancamiento financiero y robustez financiera de los posibles oferentes con acreditación del 100% del presupuesto oficial es viable; de acuerdo con el plan de pagos y actividades a realizar.

Para efectos de calcular el valor ejecutado se tendrá en cuenta el valor reportado en el RUP. Si el contrato que se pretende hacer valer contiene varios proyectos o servicios diferentes a los que se requiere para acreditar la experiencia aquí requerida, se deberá aportar certificación discriminando dichos valores. Si el contrato que se acredita se realizó a través de un contrato ejecutado por un consorcio o unión temporal, el valor ejecutado se calculará teniendo en cuenta el porcentaje de participación que hubiese tenido en el mismo.

Se tomará el valor del contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente tabla:

AÑO	**SMLMV**
2026	$1.750.905

2025	$1.423.500
2024	$1.300.000
2023	$1.160.000
2022	$1.000.000
2021	$908.526
2020	$877.803
2019	$828.116
2018	$781.242
2017	$737.717
2016	$689.455
2015	$644.350

NOTA 1: El presente cuadro es enunciativo.

Adicional a la información del RUP, la entidad solicita que se allegue certificaciones de experiencia que contengan la siguiente información (certificaciones que deben estar acreditadas en el respectivo RUP y en el respectivo formato):

1. Nombre o razón social del contratante.
2. Nombre del Contratista a quien se le expide la certificación (este debe hacer parte del consorcio o de la unión temporal, si se trata de un proponente plural).
3. Número de Contrato (si aplica).
4. Objeto, Actividades, obligaciones o alcance del contrato
5. Valor total ejecutado del contrato, expresado en pesos colombianos.
6. Plazo de ejecución en años y meses con fechas de inicio y de terminación indicando el día mes y año, de manera que se pueda establecer el tiempo de ejecución. En los casos en los que no se registre la fecha exacta de inicio y finalización, se tomará el último día del respectivo mes como fecha de inicio y el primer día del respectivo mes como fecha de terminación.
7. Fechas de suspensión y reinicio en caso de que se haya presentado.
8. Adiciones y prórrogas en caso de que hayan presentado.
9. Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación. Las certificaciones deberán ser expedidas por el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada.

Se acepta como equivalente a la certificación de experiencia, copia del acta de liquidación y/o copia de los contratos, siempre que esta última, se acompañe con la respectiva acta de liquidación, y de ella se extracte la información requerida en los numerales del 1) al 5) descritos anteriormente.

Cuando el valor de los contratos y/o certificaciones con el cual se pretende acreditar la experiencia se encuentre expresado en moneda extranjera:

a) Para el caso de contratos en dólares americanos, se hará la conversión a pesos colombianos con la TRM de las estadísticas del Banco de la República publicadas en su página oficial, para la fecha de terminación del contrato certificado.

b) Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República en su página oficial teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato certificado, y seguidamente a pesos colombianos

NOTA 2: En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar información adicional a la certificada por la Cámara de Comercio en el RUP, la entidad podrá solicitar y el proponente podrá aportar copia de contratos y/o actas de liquidación y/o certificaciones y/o documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos inscritos y certificados como experiencia del proponente en el RUP

Para la verificación del requisito habilitante previsto en el presente numeral se deberá tener en cuenta lo siguiente:

a. Todos los proponentes deberán relacionar en el **FORMATO RELACIÓN DE CONTRATOS**, los contratos que el Consejo Nacional Electoral deberá tener en cuenta para efectos de verificar la experiencia.

b. Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión Temporal o Consorcio, se acreditará la experiencia afectando el correspondiente porcentaje de participación. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial, contratos y/o liquidación, en los cuales se pueda verificar el porcentaje de su participación, aplicado al contrato correspondiente. Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos socios del consorcio o unión temporal se contará como un (1) contrato y no se afectará por porcentajes de participación.

c. Si el proponente es un consorcio o unión temporal este requisito puede ser cumplido por uno, varios o por todos los miembros del consorcio o unión temporal y se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida.

d. Se tendrán en cuenta para la verificación y evaluación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, el Consejo Nacional Electoral, podrá verificar la información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.

e. El proponente para acreditar su experiencia no podrá presentar certificaciones, ni cuentas de cobro, expedidas por el mismo, ni por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio de que haya hecho parte, ni certificaciones expedidas o suscritas por supervisores o interventores.

f. El oferente extranjero deberá cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme la legislación de su país. (Artículo 3º Ley 816 de 2003).

g. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

h. La experiencia se determinará para las personas jurídicas por el tiempo durante el cual han ejercido su actividad a partir de la fecha en que adquirieron la personería jurídica y hasta la fecha de cierre del proceso; y para las personas naturales profesionales se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la profesión, desde la fecha de grado o la fecha de expedición de la tarjeta profesional de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

i. Para sociedad extranjera sin domicilio en Colombia, se acredita aportando las certificaciones o copia de los contratos. Si las certificaciones son expedidas en otro idioma y en moneda distinta al peso colombiano, deberán realizar la traducción al castellano y el cambio del valor del contrato a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de la factura o pago total del contrato.

j. En caso de que, se relacione más de un contrato en una sola certificación, para efectos de verificación se tomará la experiencia específica del proponente directamente relacionado con los servicios y/o actividades solicitadas por la Entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones definitivo.

k. Las certificaciones de experiencia allegadas para acreditar la experiencia deberán corresponder a los contratos o certificaciones inscritas en el respectivo Registro Único de Proponentes, tal como lo señala el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, so pena de no ser tenidas en cuenta para el cómputo de la experiencia.

l. Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y el cesionario. En dicho caso, se tendrá en cuenta la fecha de terminación del contrato principal para la actualización del valor expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y el valor ejecutado por el proponente que pretenda acreditar la experiencia. El valor que se contabilizará para los efectos de los valores requeridos en este numeral será aquel que se certifique como ejecutado por el proponente, es decir no se tendrá en cuenta el valor no ejecutado por el proponente.

m. Si las certificaciones incluyen varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos.

n. Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia.

o. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará en proporción a la

partición de éstos en el capital de la persona jurídica escindida, para lo cual deberá aportarse el documento de la escisión.

p. Los contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes para efectos de determinación del valor, se tomará el valor registrado en el RUP y el mismo será actualizado con el salario mínimo legal mensual vigente al 2026.

5.2.3 CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES

En aplicación a lo establecido los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, con el fin de promover y facilitar la participación de las MIPYME DOMICILIADAS EN COLOMBIA Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES se podrán establecer condiciones habilitantes diferenciales de la propuesta en lo relacionado con un mayor número de contratos para la acreditación de experiencia.

Los proponentes interesados en acogerse a los criterios diferenciales deben manifestarlo expresamente en la Carta de Presentación de la Oferta, señalando si se constituyen como emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional o MiPymes domiciliadas en Colombia.

5.2.3.1 Criterios Diferenciales de Experiencia para Emprendimientos y Empresas de Mujeres en el Sistema de Compras Públicas:

El proponente que pretenda acreditar la experiencia como emprendimientos y empresas de mujeres deberá adjuntar los documentos que evidencien, que se encuentra en dicha situación de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) se dará aplicación al siguiente criterio diferencial:

Para el cumplimiento del requisito, el proponente deberá acreditar experiencia hasta **máximo de cuatro (04) contratos** identificados con alguno de los códigos de clasificación UNSPSC descritos anteriormente, para lo cual deberán dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la numeral experiencia mínima del proponente; debiéndose cumplir con el número de salarios mínimos exigidos para la presente contratación.

Tratándose de proponentes plurales, este criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021 y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

Se entienden como emprendimientos y empresas de mujeres de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021 aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

"Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de

compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse

bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección."

NOTA: El presente Incentivo contractual para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluye la aplicación del criterio diferencial para MiPymes.

5.2.3.2 Criterios Diferenciales de Experiencia para Mipymes:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia habilitante, se establece un criterio diferencial para las Mipymes colombianas, con relación al número de contratos para la acreditación de experiencia.

Para el cumplimiento del requisito de experiencia mínima, el proponente deberá acreditar experiencia de hasta un **máximo de cuatro (04) contratos**, identificados con alguno de los códigos de clasificación UNSPSC descritos anteriormente, para lo cual deberán dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la numeral experiencia mínima del proponente; debiéndose cumplir con el número de salarios mínimos exigidos para la presente contratación.

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, bajo los criterios dispuestos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente aportará la copia del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, con una fecha de MÁXIMO TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.

Para la verificación de este requisito, el proponente deberá indicar cuál de los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado.

Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información:

a. Objeto del contrato.

b. Valor del Contrato

c. Fecha de Inicio del Contrato

d. Fecha de terminación del Contrato

e. Nombre y Firma de quien expide la certificación

NOTA 1: El cumplimiento de la anterior disposición y de conformidad con en el Parágrafo 3 del Artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, la experiencia mínima diferencial para MIPYME no será aplicable en las convocatorias limitadas a MIPYME que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto en mención.

NOTA 2: El presente incentivo contractual para MiPymes no excluye la aplicación del criterio diferencial para las empresas y emprendimientos de mujeres.

VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DIFERENCIALES:

El comité técnico evaluador procederá a verificar directamente en el certificado del RUP, la siguiente información:

El proponente persona natural, jurídica, individual o plural deberá acreditar la experiencia con el certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios en tercer nivel expresado, por lo que, la certificación correspondiente a cada contrato aportado deberá evidenciar la experiencia acreditada en el RUP y cuyo objeto se relacione con el objeto de la presente contratación e inscrito **en al menos uno (1) de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios que se verificarán hasta el tercer nivel:**

Segmento	Familia	Clase	Producto
82000000	82100000	82101600	82101601
82000000	82100000	82101600	82101602
82000000	82100000	82101800	82101801
82000000	82100000	82101900	82101901
82000000	82100000	82101900	82101902
83000000	83110000	83121700	83121701
83000000	83110000	83121700	83121702

5.2.4 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:

Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace la entidad de conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Determinación de los Requisitos Habilitantes”.

A través de los indicadores de capacidad financiera se busca establecer unas condiciones mínimas que deben cumplir los proponentes ante la posibilidad de contratar con el Estado, razón por la cual se hace necesario medir la realidad financiera de estos, su capacidad de asumir compromisos en el ejercicio de su objeto social y la posibilidad de cumplir oportunamente con las obligaciones de la presente negociación.

De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Título I “Contratación Estatal”, Capítulo I “Sistema de Compras y Contratación Pública, Sección I “Concepto Básicos para el Sistema de Compras y Contratación Pública”, Subsección 5 “Registro Único de Proponentes”, Articulo 2.2.1.1.15.3 “Requisitos Habilitantes contenidos en el RUP”, numeral 3 “Capacidad Financiera”, se realizará la verificación de los siguientes indicadores:

INDICADOR	ÍNDICE REQUERIDO
Índice de liquidez	Mayor o igual a: 2
Índice de endeudamiento	Menor o igual a: 65%
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a: 4
Capital de trabajo	Mayor o igual al 50% ($ 4.312.523.108,00)

LIQUIDEZ = (ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE), el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Conversiones:

IL = Índice de Liquidez
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
%O = Porcentaje de participación del Oferente1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

$$IL = AC / PC$$

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación o unión temporal:

$$IL = \frac{(AC1 * \%O1) + (AC2 * \%O2) + (ACn * \%On)}{(PC1 * \%O1) + (PC2 * \%O2) + (PCn * \%On)}$$

Análisis del Resultado

Liquidez igual o superior a 2	Cumple
Liquidez inferior a 2	No Cumple

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL), el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Conversiones:

E = Endeudamiento
PT = Pasivo Total
AT= Activo Total
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

E = PT / AT

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación o unión temporal:

$$IL = \frac{(PT1 * \%O1) + (APT2 * \%O2) + (PTn * \%On)}{(AT1 * \%O1) + (AT2 * \%O2) + (ATn * \%On)}$$

Análisis del Resultado

Endeudamiento inferior o igual a 0.65	Cumple
Endeudamiento Superior al 0.65	No Cumple

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el **CONTRATISTA** incumpla sus obligaciones financieras.

Conversiones:

CI = Cobertura de Intereses
UO = Utilidad Operacional
GI = Gasto intereses
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N
Oferentes que se presenten individualmente:

CI = UO / GI

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación:

$$CI = \frac{(UO1 * \%O1) + (UO2 * \%O) + (UOn * \%On)}{(GI1 * \%O1) + (GI2 * \%O2) + (GIn * \%On)}$$

Análisis del Resultado

Puede presentarse la situación en la que un oferente no presente gastos por intereses. En cuyo caso, el valor de gastos por intereses es cero (0). Si el cálculo de la Razón de cobertura de intereses es igual a Utilidad Operacional sobre Gastos de intereses, el indicador Razón de Cobertura de intereses arrojaría como resultado “indeterminado”, ya que todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. **Dado este caso, el CONTRATISTA queda habilitado** en cuanto a este indicador.

Oferentes con utilidad operacional y sin gastos de interés (indeterminado)	Cumple
Oferentes con pérdida operacional y sin gastos de interés	No cumple
Razón de Cobertura de Intereses igual o superior a 4	Cumple
Razón de Cobertura de Intereses inferior a 4	No cumple

Nota 1: Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), que al cierre del ejercicio económico presenten Utilidad Operacional negativa afectando el cálculo de los indicadores de Capacidad Financiera con un resultado negativo, se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes, toda vez que la ausencia de lucro es una de sus características fundamentales. Adicionalmente para este tipo de entidades, se establece el cálculo del indicador adicional de Apalancamiento a Corto Plazo (Pasivo Corriente dividido entre Patrimonio), cuyo resultado debe ser mayor o igual a cero (0), con el fin de evaluar el grado de compromiso de los socios o accionistas para atender deudas en el corto plazo. Si la información contenida en el RUP no permite evaluar el cálculo del indicador adicional de Apalancamiento a Corto Plazo, el CNE hará la verificación en forma directa solicitando al CONTRATISTA, documentos adicionales para tal fin, dando aplicación a lo establecido en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

Nota 2: En caso de que el CONTRATISTA sea plural (unión temporal o consorcio), deberá presentar la información de Capacidad Financiera, por cada uno de sus integrantes. Si dentro del oferente plural alguno de sus integrantes es ESAL, la evaluación de los indicadores se efectuará teniendo en cuenta la condición especial de este tipo de integrantes dentro del CONTRATISTA plural, esta evaluación se realizará de manera separada por cada integrante.

Nota 3: La Entidad podrá solicitar indicadores adicionales, cuando lo determine necesario de acuerdo con el análisis realizado y teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, la naturaleza, valor, complejidad y Riesgo del Proceso de Contratación

Nota 4: El resultado de los indicadores no se redondeará y se tomará el resultado en su totalidad, tomando los dos primeros decimales.

Nota 5: Para el cálculo de los indicadores, sí el proponente tiene los dos componentes del indicador negativos, aunque en el documento RUP se establezca este indicador como positivo a causa de la ley de los signos, la Entidad considerará como No cumple y será declarado No hábil, en los demás casos se tomará la información contenida en el RUP.

CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente - Pasivo Corriente), es el dinero que tiene disponible **el CONTRATISTA** para cumplir con sus obligaciones actuales a corto plazo y es un excelente indicador de la salud de un negocio. A mayor capital de trabajo, menor es la probabilidad de que el **CONTRATISTA** incumpla sus obligaciones financieras.

Conversiones:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente
%O = Porcentaje de participación del Oferente1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

$$CT = AC - PC$$

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación o unión temporal:

$$CT = ((AC1 * \%O1) + (AC2 * \%O2) + (ACn * \%On)) - ((PC1 * \%O1) + (PC2 * \%O2) + (PCn * \%On))$$

Análisis del Resultado:

Capital de trabajo igual o superior a 50% del valor del presupuesto establecido (≥ $ 4.312.523.108,00)	Cumple
Capital de trabajo inferior a 50% del valor del presupuesto establecido (≤ $ 4.312.523.108,00)	No Cumple

5.2.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

De acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad verificara los siguientes indicadores en la Capacidad Organizacional registrada en el RUP, así:

INDICADOR	ÍNDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre patrimonio	Igual o Mayor al 15%
Rentabilidad sobre activos	Igual o Mayor al 12%

Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio): mediante este indicador permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital invertido en la empresa. Por tanto, a mayor rentabilidad de patrimonio, mejor es la capacidad organizacional del proponente.

Conversiones:

RP = Rentabilidad del Patrimonio
UO = Utilidad Operacional
PA = Patrimonio
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

$$RP = UO / PA$$

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación o unión temporal:

$$RP = \frac{(UO1 * \%O1) + (UO2 * \%O2) + (UOn * \%On)}{(PA1 * \%O1) + (PA2 * \%O2) + (PAn * \%On)}$$

Análisis del resultado

Rentabilidad del Patrimonio superior o igual a 0.15	Cumple
Inferior al 0.15	No Cumple

RENTABILIDAD DEL ACTIVO. (Utilidad Operacional / Activo Total): determina la capacidad que tienen los activos de generar utilidades. Por tanto, a mayor rentabilidad del activo, mejor es la capacidad organizacional del proponente.

Conversiones:

RA = Rentabilidad del Activo
UO = Utilidad Operacional
AT = Activo Total
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

$$RA = UO / AT$$

Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación o unión temporal:

$$RA = \frac{(UO1 * \%O1) + (UO2 * \%O2) + (UOn * \%On)}{(AT1 * \%O1) + (AT2 * \%O2) + (ATn * \%On)}$$

Análisis del Resultado

Rentabilidad del Activo superior o igual a 0.12	Cumple
Inferior al 0.12	No Cumple

Nota 1: Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), que al cierre del ejercicio económico presenten Utilidad Operacional negativa afectando el cálculo de los indicadores de Capacidad Financiera con un resultado negativo, se considera que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes, toda vez que la ausencia de lucro es una de sus características fundamentales. Adicionalmente para este tipo de entidades, se establece el cálculo del indicador adicional de Apalancamiento a Corto Plazo (Pasivo Corriente dividido entre Patrimonio), cuyo resultado debe ser mayor o igual a cero (0), con el fin de evaluar el grado de compromiso de los socios o accionistas

para atender deudas en el corto plazo. Si la información contenida en el RUP no permite evaluar el cálculo del indicador adicional de Apalancamiento a Corto Plazo, el CNE hará la verificación en forma directa solicitando al CONTRATISTA, documentos adicionales para tal fin, dando aplicación a lo establecido en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

Nota 2: En caso de que el CONTRATISTA sea plural (unión temporal o consorcio), deberá presentar la información de Capacidad Financiera, por cada uno de sus integrantes. Si dentro del oferente plural alguno de sus integrantes es ESAL, la evaluación de los indicadores se efectuará teniendo en cuenta la condición especial de este tipo de integrantes dentro del CONTRATISTA plural, esta evaluación se realizará de manera separada por cada integrante.

Nota 3: La Entidad podrá solicitar indicadores adicionales, cuanto lo determine necesario de acuerdo con el análisis realizado y teniendo en cuenta las características del objeto a contratar, la naturaleza, valor, complejidad y Riesgo del Proceso de Contratación

Nota 4: El resultado de los indicadores no se redondeará y se tomará el resultado en su totalidad, tomando los dos primeros decimales.

Nota 5: Para el cálculo de los indicadores, sí el proponente tiene los dos componentes del indicador negativos, aunque en el documento RUP se establezca este indicador como positivo a causa de la ley de los signos, la Entidad considerará como No cumple y será declarado No hábil, en los demás casos se tomará la información contenida en el RUP.

5.3 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN.

Una vez el Consejo Nacional Electoral haya verificado que las propuestas cumplen con las exigencias de verificación de cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, las mismas serán ponderadas, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, y del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre una asignación máxima total de **100 puntos**, así:

Para efectos de la ponderación, y con el fin de determinar la Oferta o Propuesta más favorable para el CNE, se evaluarán exclusivamente las Ofertas o Propuestas que cumplen la totalidad de los requisitos habilitantes definidos en el pliego de condiciones:

CRITERIOS DE SELECCIÓN	PUNTAJES
Factor económico	**87,5**
Criterios diferenciales para emprendimiento y empresas de mujeres	**0.25**
Criterios diferenciales para Mipymes	**0.25**
Vinculación de personas con discapacidad	**2**
Apoyo Industria Nacional	**10**
TOTAL	**100**

5.3.1 FACTOR ECONÓMICO (hasta 87,5 puntos):

Se deberá diligenciar el formato de presentación de la propuesta económica, adjunto en el FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA y este debe ser remitido en formato PDF y EXCEL, este documento debe venir debidamente firmado por el proponente.

La oferta se debe presentar en valores redondeados al peso.

Para la elaboración de la propuesta, el oferente debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos derivados de la preparación de la oferta y para la ejecución del contrato en el evento en que resulte beneficiado con la adjudicación.

La propuesta Económica debe contener, lo siguiente:

1. Propuesta económica según Anexo “OFERTA ECONÓMICA”.
2. El proponente deberá diligenciar el valor del presupuesto oficial en la plataforma SECOP II.

Nota 1: Será causal de rechazo superar el precio techo de alguno de los ítems o el presupuesto oficial del presente proceso de selección.
Nota 2: Será causal de rechazo que el FORMATO de la oferta económica no se encuentre completamente diligenciado.
Nota 3: Será causal de rechazo la modificación del ítem, descripción, unidad, cantidad, valor techo u otros elementos esenciales de la oferta económica fijados por la entidad y/ o la presentación de este documento en un formato distinto al solicitado por el CNE.
Nota 4: El formato de oferta económica debe ser remitido en Excel y PDF

-PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO:

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información obtenida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, el CNE deberá aplicar el trámite descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

El CNE realizará la verificación de los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del proceso para la presente contratación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la PROPUESTA presentada.

El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes, de tal manera que el CNE sólo evalúe las ofertas de aquellos oferentes que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación.

El CNE se reserva la facultad de verificar toda la información presentada, para lo cual solicitará a las entidades estatales y privadas la información que considere necesaria.

-CORRECCIÓN ARITMÉTICA:

El CNE solo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas a que haya lugar en la oferta económica cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético de una operación erróneamente realizada.

Por error aritmético se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Si el valor de la propuesta económica ya sea el registrado que fue verificado y/o el corregido es superior al valor del presupuesto definido por la entidad, se RECHAZARÁ la propuesta.

La entidad podrá realizar estas correcciones aritméticas siempre y cuando tales ajustes no modifiquen el valor total de la oferta en una proporción superior al (0.1%). Estas correcciones deberán referirse exclusivamente a errores evidentes de suma, resta, multiplicación o división, y no implicarán en ningún caso alteración de los elementos esenciales de la propuesta ni cambio en los precios unitarios ofertados.

Si el proponente no indica en su propuesta económica o no le da valor a uno o alguno de los ítems relacionados, se entenderá que ha presentado una propuesta parcial, y será causal de RECHAZO de la propuesta económica.

-DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

5.3.1.1. OFERTA ECONÓMICA: HASTA 87,5 PUNTOS

El CNE a partir del valor de las ofertas debe asignar ochenta y siete coma cinco (87,5) puntos, de acuerdo con el método escogido para la ponderación de la oferta económica:

- **MENOR VALOR:**

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el CNE procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Puntaje\ i = \left\{ \frac{VALOR\ MAXIMO\ PUNTAJE * V_{MIN}}{V_i} \right\}$$

Donde,

$VMIN$=*Menor valor de las Ofertas válidas.*
Vi= *Valor total de cada una de las Ofertas*
i = Número de oferta.

NOTAS: El resultado de la fórmula del puntaje máximo a otorgar se cuantificará con dos decimales.

La entidad evaluará las propuestas con arreglo a los principios de prevalencia del interés general, legalidad, planeación, igualdad, transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, celeridad, moralidad, eficiencia, imparcialidad, publicidad, contradicción, eficiencia, equilibrio y conmutatividad. La entidad considerará solamente aquellas ofertas que cumplan los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y cuyos valores se encuentren ajustados al mercado de conformidad con el análisis del sector y estudio de mercado que sustentan el presupuesto del presente proceso.

5.4 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES DECRETO 1860 DE 2021 (hasta 0.25 Puntos)

El Consejo Nacional Electoral otorgará puntaje al proponente que acredite el cumplimiento de alguna de las condiciones conforme a las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14, en concordancia con el 2.2.1.2.4.2.15 adicionados al Decreto 1082 de 2015 por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres, del Decreto 1860 de 2021.

Las certificaciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, que fue adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.

Corresponde al supervisor (a) del contrato, verificar que la (el) contratista dé cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente numeral durante la ejecución contractual.

Para los efectos, el Consejo Nacional Electoral asignará el siguiente puntaje:

CRITERIO	PUNTAJE MÁXIMO 0.25
1. Cuando el proponente acredite el cumplimiento de alguna de las condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, adicionado al Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021.	0.25 PUNTOS
2. Cuando el proponente no acredite el cumplimiento de alguna de las condiciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, adicionado al Decreto 1082 de 2015 a través del Decreto 1860 de 2021.	0 PUNTOS

5.5 MIPYMES. DECRETO 1860 DE 2021 (hasta 0.25 Puntos)

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia, con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, para el presente proceso de selección, se asignará 0.25 puntos adicionales al proponente que acredite la condición de Mipyme de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y en el pliego de condiciones del presente proceso de selección.

En todo caso, las Mipymes acreditarán esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento del cierre del proceso. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos allegados para acreditar la experiencia solicitada y los índices de la capacidad financiera y organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. Para los proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipymes y tiene una participación igual o superior al 10% en el consorcio o la unión temporal.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

ACREDITACIÓN CALIDAD DE MIPYMES

MIPYME	MEDIO PARA ACREDITARLO
Mipyme- Persona Natural	Mediante certificación expedida por ellos y un contado público, adjuntando copia del registro mercantil.
Mipyme - Persona Jurídica	Mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

De otra parte, el Consejo Nacional Electoral se permite manifestar que de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el

artículo 3º del Decreto 1860 de 2021, el cual establece en el Parágrafo 2º: "Que los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas."

NOTA: En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este criterio diferencial.

5.6 PROPONENTES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 2 PUNTOS

De conformidad con lo previsto en el Decreto 0287 de 2026, mediante el cual se reglamenta el Sistema Integral de Preferencias en favor de las Personas con Discapacidad en la contratación estatal, la Entidad otorgará un puntaje adicional correspondiente al dos por ciento (2%) del puntaje total establecido para la evaluación de las ofertas, al proponente que acredite la vinculación de personas con discapacidad en su planta de personal y cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá:

1. Certificar, mediante documento suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, el número total de trabajadores vinculados a su planta de personal a la fecha de cierre del proceso.

   Se debe acreditar certificación de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015, conforme al Decreto 0287 de 2026, que deberá expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, mediante certificado expedido por el Ministerio del Trabajo vigente a la fecha de cierre del proceso.

El número mínimo de trabajadores con discapacidad requerido será el siguiente:

Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido	Puntaje
Entre 1 y 30	2	2
Entre 31 y 100	3	
Entre 101 y 150	4	
Entre 151 y 200	5	
Entre 201 y 300	7	
Entre 301 y 400	10	

Entre 401 y 500	12	
Entre 501 y 600	14	
Entre 601 y 700	16	
Más de 700	Por cada 100 trabajadores adicionales, dos (2) trabajadores con discapacidad adicionales	

Nota 1. Para acreditar este criterio, el proponente deberá diligenciar el anexo correspondiente al incentivo para personas con discapacidad y aportar el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

Nota 2. Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unión temporal), se tomará en cuenta únicamente la planta de personal del integrante con mayor participación porcentual.

El puntaje adicional previsto en este numeral será único y no acumulable con otras situaciones que el proponente acredite en materia de discapacidad.

5.7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (hasta 10 puntos):

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deben garantizar la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo puntaje a los proponentes que, en su oferta, mediante certificación suscrita por el representante legal, ofrezcan vincular el 40% del personal nacional para la ejecución del contrato, de acuerdo con la regla de origen aplicable.

Por lo anterior, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, se asignará un puntaje equivalente al diez por ciento (10%) del total de puntos para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten servicios nacionales, y del cinco por ciento (5%) por la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros, dentro de los rangos previstos en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003.

El principio de Reciprocidad indica que se otorgará el mismo tratamiento de bienes y servicios nacionales a:

(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;

(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión

y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y

(c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

En caso de ser consorcios y/o uniones temporales el proponente deberá diligenciar el formato individualmente para cada uno de sus miembros y allegar la documentación que se requiera para cada uno de los integrantes.

Por lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto los puntajes que se asignarán en cada una de las circunstancias son presentados en el siguiente cuadro:

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE MÁXIMO 10
Promoción de Servicios Nacionales.	10 PUNTOS
Trato Nacional o Acuerdo Comercial.	10 PUNTOS
Promoción de la incorporación de componentes nacionales en servicios extranjeros.	5 PUNTOS

En ningún caso se otorgará simultáneamente el puntaje por Promoción de Servicios Nacionales, Trato Nacional o Acuerdo Comercial ni Promoción de la Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros; es decir, únicamente será acreedor de puntaje por una de las opciones detalladas en la tabla inmediatamente anterior, según sea el ofrecimiento.

Para el caso de las figuras asociativas, serán servicios nacionales aquellas conformadas por personas jurídicas constituidas en Colombia, o por estos y un extranjero con trato nacional.

5.8 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL:

Se asignarán hasta diez (10) puntos a la oferta de Servicios Nacionales y con trato nacional.

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:
✓ Persona natural colombiana: la cédula de ciudadanía del proponente.
✓ Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. ✓ Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio.
✓ Diligenciar el **FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**, el cual deberá estar debidamente suscrito por el respectivo representante legal.
✓ Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste su ofrecimiento de vincular un porcentaje mínimo del 40% del total de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos asociados al cumplimiento del contrato.
Para que el proponente obtenga puntaje por Trato Nacional debe presentar:

A. Acreditar que los servicios son originarios de los Estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio.
B. Diligenciar el **FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL,** el cual deberá estar debidamente suscrito por el respectivo representante legal.
C. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste su ofrecimiento de vincular un porcentaje mínimo del 40% del total de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos asociados al cumplimiento del contrato.

NOTA 1: El proponente podrá subsanar la falta de presentación del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; sin embargo, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional.

NOTA 2: Se asignarán diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas, no obtendrá puntaje por servicios nacionales o trato nacional.

5.8.1.1 **TRATO O ACUERDO NACIONALES:**

Se asignarán hasta diez (10) puntos a la oferta de Servicios Nacionales y con trato nacional.

Para que el proponente obtenga puntaje por Trato Nacional debe presentar:
✓ Acreditar que los servicios son originarios de los Estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio.
✓ Diligenciar el **ANEXO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**, el cual deberá estar debidamente suscrito por el respectivo representante legal.
✓ Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en la que manifieste su ofrecimiento de vincular un porcentaje mínimo del 40% del total de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos asociados al cumplimiento del contrato.

NOTA 1: El proponente podrá subsanar la falta de presentación del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; sin embargo, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional.

NOTA 2: Se asignarán diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas, no obtendrá puntaje por servicios nacionales o trato nacional.

5.8.1.2 **INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL PARA LOS**

PROPONENTES EXTRANJEROS:

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un proponente plural, y podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista (esto es, el compromiso de vincular empleados y/o contratistas por prestación de servicios colombianos en el porcentaje definido por la entidad), o si optan por cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda, en cuyo caso para puntuar dicha situación deberán:

A. Diligenciar el ANEXO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, el cual deberá estar debidamente suscrito por el respectivo representante legal.

B. Entregar Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal o apoderado del proponente, en la cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal ofrecido y su compromiso de vinculación de dichas personas naturales o jurídicas en caso de resultar adjudicatario del proceso.

La cual debe ser presentada por la plataforma del SECOP II, y ser incluida en el sobre respectivo, por ser factor de ponderación de las ofertas. Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el ANEXO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del cuarenta por ciento (40%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el proponente que presente el ANEXO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

5.9 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (2%)

1) En cumplimiento del artículo 58 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, en el informe de evaluación de las Ofertas, la entidad reducirá el dos por ciento (2%) del total de los puntos obtenidos por el Oferente, sea individual o Estructura Plural, en los casos en que se le haya impuesto una o más multas o se le haya hecho efectiva una o más cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la Fecha de Cierre prevista para el presente Proceso de Selección.

2) Esta reducción también afecta a las Estructuras Plurales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación del numeral anterior.

3) Las personas naturales y jurídicas, como oferente individual o integrante de una Estructura Plural, deberán allegar una declaración juramentada suscrita por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, en la que manifiesten si han sido objeto de imposición de multas o cláusulas penales por parte de entidades del Estado colombiano durante el último año, contado a partir de la Fecha de Cierre prevista para el presente

proceso de Selección.

- **ORDEN DE ELEGIBILIDAD:**

Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje total obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente.

La valoración de las propuestas surtida conforme con lo previsto en los numerales anteriores será objeto del informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes.

5.10 CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso de presentarse un empate entre dos o más proponentes se aplicarán las reglas del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido.

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios y Documentos Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. El riesgo**,** es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos identificados dentro del proceso de contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.

Los riesgos asociados al proceso de contratación son los definidos en la matriz de riesgos anexa al presente estudio previo.
PENDIENTE: la matriz debe publicarse con el proyecto de pliego e incluir, como mínimo, los riesgos de bloqueo o insuficiencia presupuestal; no disponibilidad de espacios en las franjas de mayor sintonía; entrega tardía o no conforme de las piezas por las organizaciones políticas; cambios en las declaraciones de oposición durante la ejecución; incumplimiento de emisión por los medios; y terminación de la capacidad de ordenación del gasto del CNE el 31 de diciembre de 2026 (Sentencia C-116 de 2026).

6 GARANTÍAS Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta

Garantía solicitada	Análisis	Cuantía del Amparo	Vigencia del Amparo
Seriedad de la Oferta	Cubre a la Entidad de los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015	10% del valor total del presupuesto oficial	Tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del proceso de selección

a. Para amparar los riesgos de naturaleza contractual

Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Garantía solicitada	Cuantía del Amparo- Suficiencia de la garantía	Vigencia del Amparo
Cumplimiento del contrato	Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	El término de ejecución del contrato, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato más seis (6) meses previstos para la liquidación del contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Por el cinco (5) % por ciento del valor total del contrato.	El término de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.
Calidad del Servicio	Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.	El término de ejecución del contrato más seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción.

7 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del decreto 1082 de 2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la presente contratación se realizó el análisis de las obligaciones que en materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales le apliquen, a efectos de lo cual se observó lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- 2024, vigente para la fecha del presente análisis.

De conformidad con la normatividad vigente, se procedió a verificar si el servicio que se pretende contratar se encuentra o no cobijado por un acuerdo internacional de libre comercio, que permita tener un referente para el análisis del mercado requerido.

Se establecen como condiciones para determinar si el proceso está cobijado por un acuerdo comercial los siguientes aspectos:

- Que se trate de una entidad que esté cubierta por un acuerdo comercial.
- Que el valor de la contratación se encuentre dentro del rango límite señalado en el acuerdo para su aplicabilidad a la entidad estatal.
- Que no se encuentre exceptuado de su aplicación.

En cuanto al primer aspecto, se procede a verificar qué acuerdos comerciales aplican, según la naturaleza de la entidad, precisando que el presente proceso de selección se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos comerciales:

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal Cubierta	Valor del Proceso de Contratación Superior al Umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierta por el Acuerdo Comercial
		Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Alianza Pacífico	Chile	SI	SI	NO	SI
	México			NO	SI
	Perú			NO	SI
Canadá		SI	SI	NO	SI
Chile		SI	SI	NO	SI
Corea		NO	NO	NO	NO
Costa Rica		SI	SI	NO	SI
Estados Unidos		SI	SI	NO	SI
Estados AELC		SI	SI	NO	SI
México		SI	SI	NO	SI
Triángulo Norte	El Salvador	SI	SI	NO	SI
	Guatemala				
	Honduras				
Unión Europea		SI	SI	NO	SI
Comunidad Andina		SI	SI	NO	SI

Por lo anterior, el presente proceso está cubierto por los acuerdos comerciales Alianza Pacífico (Chile, México, Perú), Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Estados AELC, México, Triángulo Norte, Unión Europea y Comunidad Andina, en los términos y condiciones previstos en dichos instrumentos internacionales.

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral otorgará a los bienes y servicios provenientes de los Estados con los cuales Colombia haya suscrito acuerdos comerciales el

mismo trato conferido a los bienes y servicios nacionales, observando los plazos mínimos y demás disposiciones aplicables conforme a los acuerdos comerciales vigentes.

No obstante, las condiciones asociadas a la ejecución contractual, así como la distribución de los espacios objeto del presente proceso, podrán ser modificadas por el Consejo Nacional Electoral durante la vigencia del contrato, en atención a las declaraciones de oposición, independencia o gobierno que se encuentren vigentes por parte de las organizaciones políticas con personería jurídica, de conformidad con el marco constitucional y legal aplicable.

8 ANÁLISIS DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la guía de Colombia Compra Eficiente para la elaboración del estudio del sector y lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, el Consejo Nacional Electoral elaboró el correspondiente análisis del sector, el cual se anexa al presente estudio previo.

En desarrollo de dicho análisis, el Consejo Nacional Electoral identificó las características del sector económico relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, conforme se evidencia en el documento anexo denominado **Análisis del Sector y Estudio de Mercado**, en el cual se realizó el análisis de precios del mercado con el fin de establecer los precios techo para cada uno de los ítems objeto del proceso contractual.

Cordialmente,

YESENIA TRUJILLO RAMÍREZ
Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas

DAVID ESNEYDER AGUILERA PERALTA
Jefe de oficina de Inspección